

**PERSPECTIVAS SOCIALES QUE REPERCUTEN EN LOS BENEFICIOS
ECONÓMICOS Y PERIÓDICOS DE LAS PERSONAS DE TERCERA EDAD QUE NO
ALCANZAN A PENSIONARSE EN COLOMBIA**

PRESENTADO POR: WENDY FERNANDEZ ROBLES

ASESORIA JURIDICA DE: LIGIA ROMERO



UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC

FACULTAD DE DERECHO

BARRANQUILLA

2014

**PERSPECTIVAS SOCIALES QUE REPERCUTEN EN LOS BENEFICIOS
ECONÓMICOS Y PERIÓDICOS DE LAS PERSONAS DE TERCERA EDAD QUE NO
ALCANZAN A PENSIONARSE EN COLOMBIA**

Fernández Robles Wendy

Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al título de: Abogado



UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC

FACULTAD DE DERECHO

BARRANQUILLA

2014

NOTA DE ACEPTACIÓN

Firma Jurado

Firma del Jurado

Presidente Firma del Jurado

BARRANQUILLA, JULIO 2014

DEDICATORIA

Quiero agradecerle a Dios principalmente por darme la oportunidad de terminar mis estudios, con la participación de todas las personas que me rodean.

Este trabajo lo realizo con mucho amor, dedicación y esfuerzo, y quiero dedicárselo a mis padres que han aportado en mi el optimismo, la responsabilidad que me caracteriza como persona.

A la Doctora Ligia Romero, a quien admiro mucho como persona y como profesional, quiero darle las gracias por creer en mi y por sembrarme la vocación por el área del derecho laboral y seguridad social.

Gracias a todos...

Wendy

AGRADECIMIENTOS

Como Autora expreso los siguientes agradecimientos:

A La Universidad de la Costa C.U.C., Facultad de Derecho por brindarme todas las herramientas necesarias para adquirir todos mis conocimientos referentes a mi carrera.

A los profesores de la Facultad de Derecho, quienes aportaron en mi conocimiento de cada una de las áreas, en especial a profesores que dejaron una huella en mi corazón, como lo es el Doctor Jorge Camargo, Alicia Álvarez, Omar Sandoval, Alirio Girón (Q.E.P.D.), a Plutarco Quiroz, entre otros.

A mi tutora y docente LIGIA CIELO ROMERO, quien logro desde que inicie mis clases con ella, sembrar en mi la vocación en el área del derecho laboral y seguridad social, mil gracias por todo el apoyo doctora y por dedicarme su valioso tiempo para realizar juntas este trabajo.

A la Dra. BELIÑA HERRERA, por ser oportununa para las revisiones pertinentes, y por donarme parte de sus conocimientos en temas de investigación, para poder llevar a cabo el presente trabajo.

Al Dr. ALFREDO PEÑA, por abrirme las puertas de esta facultad y por enseñarme todas las cosas positivas de mi carrera.

Gracias también, en general a mis compañeros y a todos los que me orientaron para trabajar en equipo y llegar hasta este gran logro.

RESUMEN

Para la realización del presente trabajo de investigación se llevó a cabo una revisión bibliográfica y un estudio de la normatividad vigente sobre el tema relacionado con las perspectivas sociales en los beneficios económicos del adulto mayor, haciendo énfasis en la situación jurídica y social de esta población, teniendo en cuenta que actualmente es una realidad que cada vez es evidente en Colombia..

Si bien es cierto, este grupo poblacional ha ido en crecimiento dado que las condiciones de vida actuales permiten que la adultez se prolongue por muchos años, también lo es que las condiciones familiares y jurídicas de los mismos, en ocasiones no son las ideales, por cuanto no cuentan con un beneficio económico periódico que les permita vivir una vejez con tranquilidad y mejoramiento de su calidad de vida, así como tampoco los medios económicos que les permitan tener una vejez en buenas condiciones, siendo parte activa dentro de la familia y de su entorno social.

A lo anterior se le suma la poca voluntad política de los gobernantes de turno al no destinar los recursos necesarios para que se adelanten unos programas o proyecto de ley que permita maximizar una protección integral a los adultos mayores que lo requieran en relación a lograr una pensión digna. Pero lastimosamente es una realidad que se vive diariamente y en Barranquilla se puede ver como diariamente existen personas de la tercera edad que aún tienen que valerse de sus propios medios para su sostenimiento económico y familiar sin miras a tener un requisito mínimo de descanso por el tiempo de vida, en donde muchos de ellos por quebrantos de salud no pueden mantenerse llegando a caer en la mendicidad.

PALABRAS CLAVES: Adulto Mayor, pensión de jubilación, vulnerabilidad jurídica, beneficio económico.

ABSTRACT

To carry out the present research work was carried out a literature review and a survey of current regulations on the issue related to social perspectives on the economic benefits of the elderly, emphasizing the legal and social situation of the population, considering it is now a reality that is increasingly evident in Colombia ..

Although, this population has been growing since the current living conditions allow the adult to continue for many years, so is that family and legal conditions thereof, are sometimes not ideal for as they do not have an economic benefit newspaper that allows them to live an old age in peace and improve their quality of life, nor the financial means to enable them to an old age in good condition, being an active part in the family and its social environment.

To this is added the lack of political will of those in power to not allocate the necessary resources for a program or bill to maximizing comprehensive protection for older adults who require in relation to achieving a pension are ahead worthy. But unfortunately it is a reality that is lived daily and in Barranquilla you can see as there are daily senior age still have to rely on their own resources for their economic and family support without a view to have a minimum requirement of rest time of life, where many of them because of health can not keep coming to fall into begging.

KEYWORDS: Elderly, pension, legal vulnerability, economic benefit.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
RESUMEN	
ABSTRACT	
INTRODUCCIÓN	10
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	12
1.1. Descripción del Problema	12
1.2. Pregunta Problema	14
1.3. JUSTIFICACIÓN	14
1.4. OBJETIVOS	16
1.4.1. Objetivo General	16
1.4.2. Objetivos Específicos	16
1.5. IMPACTO INTERNO	17
CAPÍTULO 1.	
CARACTERIZACIÓN DEL MARCO PROPORCIONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ADULTO MAYOR	19
1.1.- ANTECEDENTES:	19
1.2 PARADIGMAS E INTERPRETACIONES DEL RÉGIMEN EN SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR	24
1.3 EL RÉGIMEN PENSIONAL COLOMBIANO	32
1.3.1 Sistema pensional colombiano.	36
1.3.2 Ley 100 de 1993	37
1.3.3 Estructura básica del sistema	38
1.3.4 Financiación.	38

1.3.5 Formas de pensionarse en Colombia.	41
1.4 MARCO LEGAL	49
CAPÍTULO 2.	
SITUACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA SOCIEDAD ACTUAL	51
2.1 ASPECTOS DE VULNERABILIDAD QUE AFECTAN A LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	52
2.2. NORMATIVIDAD VIGENTE TENDIENTES A FORTALECER LOS NIVELES DE PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	69
2.2.1 Análisis conceptual legal	69
2.3 CALIDAD DE VIDA EN LA VEJEZ	76
2.4 POLÍTICAS DE VEJEZ	79
CAPÍTULO 3. DIAGNOSTICO PRELIMINAR SOBRE PERSONAS MAYORES, DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES EN COLOMBIA	84
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	92
RECOMENDACIONES	92
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	

INTRODUCCIÓN

La realización de la presente investigación, ha entrado en una búsqueda para determinar e identificar las características inherentes a los riesgos sociales que tienen los adultos mayores en cuanto a la capacidad de los beneficios económicos y periódicos de esta población y que por diferentes circunstancias o razones no han podido pensionarse en Colombia.

Es importante tener en cuenta que todos los adultos mayores no presentan las mismas características de salud ni económicas, así por ejemplo encontramos adultos mayores con problemas físicos, psicológicos y enfermos, al igual que adultos mayores que carecen de ingresos o que los que perciben están muy por debajo de lo que se requiere para cubrir las necesidades requeridas; dejando de lado los aspectos anteriormente mencionados éstas personas claramente requieren de cuidados específicos de acuerdo a las discapacidades o condiciones sociales que presenten cada uno de ellos, pero por sobre todo, requieren de una atención que considere su dignidad de personas.

De acuerdo con lo anotado anteriormente y teniendo en cuenta las características relacionadas con él porque al Estado le corresponde velar por el bien común de la sociedad, es que se hace necesario supervisar los elementos y herramientas que se han replanteando en el actual sistema en seguridad social, y cómo brindan atención especial a los adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad por factores alternos y externos. Se trata entonces de que cumplan con los requerimientos de una infraestructura adecuada, al igual que la atención que brinde el personal que trabaja en el trato directo a los adultos mayores. En el caso de estos últimos, se espera que tengan los conocimientos necesarios para entregar los cuidados

especializados que requieren los adultos mayores. En definitiva, se necesita que se puedan analizar las principales perspectivas sobre los principales beneficios a los que esta población tiene derecho y enfrentar los principales paradigmas que se han dado a través de la historia frente a estas necesidades inherentes en esta población.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción del Problema.

Es imperioso el poder analizar las principales perspectivas que se han dado en torno a la teoría de la seguridad Social en Colombia, y más que todo al darse de alguna manera los alcances que ésta pueda tener en la población de la tercera edad sobre todo en el contexto de la pensión, en donde es notorio en nuestro país cómo aún existen poblaciones que no han logrado obtener el lleno de estos requisitos y hacía donde va su situación social en estos momentos.

El presente trabajo de investigación propuesto en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Costa C.U.C., en donde se busca darle una interpretación exhaustiva sobre la protección a las personas que llegaron a la vejez, pero por la falta de capital, o por falta del número de semanas cotizadas no pueden alcanzar a la pensión. Actualmente el gobierno ha tratado de evidenciar y lanzar mecanismos proteccionistas frente a esta situación y uno de ellos ha sido el lanzamiento de un subsidio que favorecería a estas personas lo cual podría salir del presupuesto nacional, es decir cuatro (4) puntos del Producto Interno Bruto representados.

Según diferentes estudios formulados y apuntes realizados por el gobierno prácticamente existe una población de cerca de 7 millones que actualmente no reciben una contraprestación en su vejez, El CONPES aprobó el mecanismo por el cual una persona puede tener una cuenta y luego cuando llegue al final de su vida laboral (57 mujeres - 60 hombres, y apartar del 2014 aumenta dos años) nosotros le subsidiamos (agregamos) el 20% de los que haya ahorrado.

Se puede ver con todo esto que básicamente la vida laboral de los trabajadores o de retiro es de 60 años para hombres y 57 para mujeres, han hecho efectivo sus ahorros o cotizaciones, en 10 años en el sistema de prima media, y no le alcanza puede retirar esos ahorros y pasarlos a este sistema, para esto es necesario que se puedan formular estrategias que de alguna manera garanticen la efectividad de este fenómeno social.

En el contexto de los antecedentes en torno a los beneficios económicos periódicos se puede ver que éstos fueron formulados por el Acto Legislativo 01 del 2005 bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, y reglamentado por la Ley 328 del 2009, esta reglamentación busca diseñar estrategias que puedan beneficiar a la población de la tercera edad que haga parte de los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, es decir, que se encuentran en niveles de vulnerabilidad.

Este Esquema Flexible de Protección para la Vejez funciona para las personas que no pueden aportar el mínimo exigido por la ley para estar en el sistema, ya sea público o privado, o que estuvieron en el sistema, realizaron aportes y no han podido continuar cotizando para tener las semanas requeridas.

De acuerdo con los sofismas anotados anteriormente, para la investigadora del presente trabajo de investigación se le hace interesante el poder desarrollar una serie de aportes y análisis conceptuales que permitan de alguna manera el poder acercarse a la delimitación del fenómeno en estudio y poder con los resultados obtenidos evidenciar los elementos y herramientas necesarias de contenido en el proceso de investigación en Seguridad Social se refiere.

1.2 PREGUNTA PROBLEMA

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario realizarse la siguiente pregunta problema:

¿Qué aspectos sociales que puedan repercutir en los beneficios económicos y periódicos de las personas de tercera edad que no alcanzan a pensionarse en Colombia?

1.3 JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se encuentra enlazada en el contexto de la seguridad social, en donde se pretende analizar y desarrollar a través de la interpretación de los diferentes teóricos especializados en el área de la Seguridad Social, los beneficios económicos y periódicos a los que tienen derecho la tercera edad en Colombia y sobre todo el poder analizar las principales perspectivas que se den en torno a su aplicabilidad, observándose si aún en nuestro sistema se ha avanzado o aún no se han podido dar los aportes necesarios para que esta población objeto del presente estudio se les pueda formular estrategias para sus niveles de sostenimiento.

Según datos estadísticos valdría la pena destacar que en Colombia existen cerca de 17 millones de personas en el sistema pensional pero solo 6 millones 700 están activos. Los 10 millones de personas que no están activas pero tienen un saldo, hasta antes de esta medida solo podían pedir la devolución del dinero acumulado sin importar la cantidad, y luego quedar desprotegidos el resto de los años.

Con este mecanismo, los colombianos podrían pasar su saldo a la cuenta de BEPS, que quedarán activas en COLPENSIONES a partir de diciembre y obtener inmediatamente el beneficio del 20%. Esta medida permite que el beneficiario voluntario del esquema aumente su saldo de manera proporcional a su ahorro, 20 pesos por cada 100 pesos que hayan sido ahorrados.

De acuerdo con este formulismo hay que destacar que esta estrategia de alguna manera pueda contribuir o cubrir la mayor parte de la población que trabaja y que no está en la formalidad, pero para esto es necesario también analizar los diferentes elementos y herramientas que el actual sistema de seguridad social ha realizado y si realmente existen garantías que de alguna manera puedan aprovecharse para maximizar el fenómeno social que se está viviendo actualmente en Colombia.

Más que todo la importancia de la presente investigación es dar la oportunidad de que se soslayen las participaciones que el Estado debe formular y que constitucionalmente se deben cumplir en el contexto de la seguridad social enmarcado en la población de la tercera edad y con lo que se obtenga se pueda formular un programa o un marco legal que pueda ser aprobado por el Estado y se fundamente el fenómeno en estudio, por cuanto hay que tener en cuenta que Colombia es un estado social de derecho, por consiguiente es un Estado garantista.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General

Analizar los aspectos sociales que repercuten en los beneficios económicos y periódicos de las personas de tercera edad que no alcanzan a pensionarse en Colombia.

1.4.2 Objetivos específicos

- Interpretar los aportes teóricos que se han dado sobre el tema en el contexto de Seguridad Social enmarcado en el sistema pensional en Colombia.
- Diferenciar los diferentes elementos que se han dado sobre la posibilidad de darle efectividad a los beneficios económicos y periódicos de las personas de tercera edad que no se pensionan.
- Conocer las bases constitucionales y jurisprudenciales que han tratado el tema y los resultados que se han direccionado en sus aportes.

1.5 IMPACTO INTERNO

El presente trabajo de investigación Jurídica, generará un positivo impacto académico en la población estudiantil y docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Costa, toda vez que el tema tiene incidencia en las normas, mecanismos y programas jurídicos y sociales que regulan la protección de los derechos fundamentales y conexos, del adulto mayor sobre todo en lo que tiene que ver con las perspectivas sociales que repercuten en torno a los beneficios económicos y periódicos al no lograr pensionarse , es importante tener en cuenta que este tema puede redundar en lograr propiciar más adelante un estudio más minuciosos del tema mancomunadamente con las diferentes áreas de la Universidad para propiciar proyectos de leyes que vayan más allá con las perspectivas que se tiene sobre la realidad que viven las personas de la tercera edad en estos momentos específicamente en el Distrito de Barranquilla.

El tema en comento, aunque de tinte ampliamente jurídico por obvias razones, no deja de lado el impacto Social, Sicológico y de las perspectivas que tenga esta población en un futuro determinado y además como lo es el poder fomentar la preocupación y la observancia seria sobre el estado de salud y los elementos reforzadores de la necesidad compulsiva de mejorar su situación actual y quienes con pensamientos positivos como futuros Abogados de la Universidad de la Costa, para que investiguen más exhaustivamente y generen ideas que cambien las condiciones hasta ahora provistas para afrontar este fenómeno socio-jurídico que cada día aqueja al adulto mayor en Barranquilla y el resto del país,

Serán los futuros profesionales del Derecho, acompañados del cuerpo Docente investigativo de la Universidad de la Costa, los que terminen de cultivar la pequeña semilla que se ha plantado con el presente trabajo investigativo, seguramente debido a lo novedoso del tema tratado en un nivel formal como el presente, fomentará críticas y debates que obligaran sin duda alguna a la

construcción integral del conocimiento de una comunidad ávida de aspectos fácticos Jurídico Social, que ejerciten las competencias individuales y de grupos.

No cabe la menor duda que el Impacto Interno será muy positivo y generador de nuevas ideas y planteamientos acerca de cómo se pueden diseñar normas jurídicas, mecanismos y programas, que permitan una verdadera y material protección de los derechos fundamentales y conexos del adulto mayor y su entorno social y familiar.

CAPÍTULO 1.

CARACTERIZACIÓN DEL MARCO PROPORCIONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ADULTO MAYOR

1.1 ANTECEDENTES

A través del proceso histórico que se ha dado en Colombia dentro en un contexto político y social, se ha tratado de generar un cambio respecto a los diferentes mecanismos que se deben aplicar a la población adulta mayor teniendo en cuenta las nuevas tendencias sociales y políticas que se han generado en Colombia como consecuencia de situaciones de orden público, el conflicto interno armado, los niveles de pobreza, la situación económica, el desempleo, entre otros, son aspectos que de cierta forma han repercutido en la necesidad de crear nuevos lineamientos jurídicos y legales que contribuyan al reforzamiento de la población adulta mayor. (Cardona D, Estrada A, 2003)

Al pasar el proceso histórico vale la pena remontarse a la década de los años ochentas, luego de la marcada crisis de la deuda económica surgida en América Latina se puede apreciar en el contexto de las políticas promovidas por el Consenso, se dieron una serie de introducciones relacionadas con las reformas en los sistemas de seguridad social en lo que tiene que ver con las pensiones de jubilación se observa en la década de los noventas con la vigencia de esquemas de capitalización individual de aportes definidos con administración privada de los fondos.

Las reformas históricas que se estaban gestando en América Latina y con la llegada del modelo de jubilación chileno se buscó darle una forma de despliegue al modelo tradicional de

reparto por sistemas que utilizan como pilar principal el modelo financiero de capitalización individual.

Aterrizando este proceso histórico se puede ver entonces como específicamente durante el año de 1993, Colombia comienza a adoptar el esquema de cuentas individuales con la introducción de la Ley 100 (Berstein, Solange; Larrain, Guillermo y Pino, Francisco (2005), con todo esto se generalizó entonces una figura a través de un sistema dual direccionándose con un sistema de capitalización individual administrado por privados con el sistema público de reparto existente, en el que el afiliado tiene la posibilidad de elegir entre un esquema u otro, los cuales son excluyentes entre sí.

De acuerdo con lo anterior, es interesante anotar que como en los otros países de Latinoamérica, esta reforma se fundamentó con los mecanismos propicios mediante los beneficios expuestos sobre la introducción de este tipo de esquemas (de capitalización individual), los cuales toman como base teórica lo que se ha denominado la nueva ortodoxia previsional (Lo Vuolo, 1996; 2002; Müller, 2002). Es importante propiciar con la modalidad que se puede dar en torno a exposición de motivos promulgados con la Ley 100 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992), se trató de dar una argumentación a favor de la conveniencia de poder crear la reforma en donde se exponen hechos como las falencias que el sistema administrado por el Instituto de Seguros Sociales y que éstos partían bases sobre la multiplicidad de administradoras y sus diferentes reglas de contenido relacionadas con la materia de contribuciones y prestaciones sociales que estaban unidas a la generación de inequidad pero frente a las altas distorsiones con las cotizaciones y los beneficios económicos dados como la

carga fiscal que era un esquema representativo, así como también la insuficiencia de reservas de las entidades que tenían a cargo el pago de obligaciones pensionales.

En esta época es interesante anotar también que se dieron conceptos involucrados sobre el régimen existente en esos momentos y se observaba un bajo rendimiento en los niveles de cobertura, sobre todo en lo que tenía que ver con los elevados costos administrativos y la mala gestión sumada a la falta de confianza por parte del Estado por entrar en ese proceso de búsqueda administrativo en este sistema, y que lo único que se conseguía era una administración privada cargada de ineficiencia, con la introducción de competencias con administradoras de fondos.

En cuanto a la conceptualización que sea tenido sobre el régimen de prima media con prestación que fue definida como (R.P.M.), se puede apreciar que los aportes de los afiliados y sus rendimientos económicos constituidos un fondo común de naturaleza pública, garantiza el pago de las prestaciones de los pensionados, ante esto surge la necesidad del Estado por responder por el pago de los beneficios económicos a los que se hacen acreedores los afiliados cuando los ingresos y las reservas del ISS se agoten, siempre y cuando, se hayan cobrado las cotizaciones (Art. 138 Ley 100/1993).

El régimen contributivo es un esquema de la solidaridad, lo cual es su principal virtud, siendo entonces un aporte de los diferentes afiliados a un fondo común, que se incrementa como consecuencia de la rentabilidad neta de las inversiones, descontado el costo de administración, de allí se pagan los beneficios a quienes se hacen acreedores luego de cumplir los requisitos para la jubilación. En el régimen de capitalización individual los afiliados aportan a un fondo para crear sus propios niveles de beneficio. (Giraldo, César (2006).

Pero, en relación a las dificultades del esquema de prima media, se dio mediante un nuevo crecimiento que el nuevo esquema era tratar de buscar mecanismos de mejoramiento sobre las diferentes concepciones sobre el acceso que permita ampliar la cobertura, y la primacía de la competencia, que resultaría de dar vía a la provisión privada, reduciría los altos costos administrativos que presentaba el sistema de prestaciones definidas, es por esto la incorporación necesaria del sector financiero, dándole entrada a los fondos de la administración que de alguna manera lograría una entrada más rentable y seguro de los ahorros de pensión, mejoraría la eficiencia y maximización de los rendimientos de las inversiones. (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992).

Es por esto que se han dado perspectivas sobre la búsqueda de los objetivos auspiciados con la reforma se planteaba mejorar los déficit previsionales y lograr el equilibrio fiscal con la disminución de la carga de las obligaciones pensionales sobre el presupuesto de la nación en torno a la población que estaba en necesidad de vulnerabilidad.

Se consideraba que la reforma propuesta cumplía con las características necesarias para superar las limitaciones del sistema existente, las pensiones del régimen de ahorro con capitalización individual serían mejores a las que se podrían obtener en el régimen de reparto simple, el sistema no sería vulnerable al crecimiento de la base de cotizantes ni al envejecimiento de la población, no generaría deuda y su único costo fiscal sería el de las garantías estatales; además, se desestimularía la evasión y la subvaloración de salarios, se contribuiría al desarrollo económico, la fidelidad en el nuevo sistema sería mayor por cuanto cada afiliado sería el principal interesado en mantenerse cotizando al sistema puesto que percibiría el hecho de realizar las cotizaciones no como un impuesto sino como un mecanismo de ahorro de recursos para su vejez, ampliando la cobertura del sistema.

Aterrizando el presente tema de investigación propuesto y continuando con las reformas, con el acto legislativo de 2005 y en lo actual con la transición a 2010, en donde se le dio proceso de eliminación de los regímenes especiales o exceptuados, únicamente se mantienen los regímenes especiales de la fuerza pública y del presidente de la República, y desde su vigencia elimina la mesada catorce para los afiliados de tres o más salarios mínimos, en el 2011 para aquellos de tres o menos salarios mínimos vigente. Adicionalmente, establece límite para las pensiones públicas en veinticinco salarios mínimos mensuales vigentes (SMMLV) a partir de 2010.

En 2009, mediante la Ley 1328, se establece la creación de la figura de multifondos y del sistema de ahorro voluntario para la vejez y los Beneficios Económicos Periódicos (Beeps) que entrará en vigencia en 2011 y aplica únicamente para quienes cotizan a los fondos privados de pensiones. Lo que busca la reforma es la diferenciación de fondos, de acuerdo con el nivel de riesgo que se asuma en las inversiones de los mismos, buscando que al asumirse mayor riesgo, especialmente en el caso de los afiliados jóvenes, se logren mayores niveles de rentabilidad. De esta manera, existirán tres tipos de fondos, el agresivo, para los trabajadores más jóvenes, con un portafolio con inversiones en renta variable hasta del 70%, y el resto en otros papeles como CDT y TES. El moderado, para personas entre los 35 y 45 años, compuesto por acciones hasta por el 40% de renta variable. Finalmente, el conservador, el cual podrá destinarse solo en un 20% a renta variable, ya que será para personas entre los 55 y 60 años.

A lo largo de los años el Estado Colombiano ha tratado de crear organizaciones, entidades, instituciones y dependencias que de acuerdo a su función y responsabilidad social puedan liderar activamente diferentes programas y acciones en beneficio del bienestar del adulto

mayor, sin embargo, se puede notar con preocupación que, a pesar de pertenecer todas a un mismo municipio, ejecutan dichos programas de una manera independiente.

1.2 PARADIGMAS E INTERPRETACIONES DEL RÉGIMEN EN SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR

Además de lo anterior, se aprecia que debido a que no se han realizado investigaciones profundas acerca de la problemática y de los niveles de vulnerabilidad del adulto mayor no se ha dado una planeación estratégica o un beneficio económico en donde se encuentren alineadas todas las acciones referentes al tema, provocando con esto que cada una de las entidades trabaje por su cuenta, no se aúnan esfuerzos, como tampoco exista una apropiada administración de los diferentes recursos, principalmente económicos, lo que ha conllevado que la atención y protección a este sector de la población no haya sido la mejor.

Así mismo se pudo apreciar que un alto porcentaje de esta población adulta llega a esta etapa de la vida sin protección alguna, ya que, por diferentes razones, no pudieron cotizar su pensión de vejez, quedando desprotegidos y sin los recursos necesarios para solventar sus necesidades básicas.

De acuerdo a lo anotado por el DANE, en el contexto socio-económico se refiere, se puede observar que aún en los estratos altos, los adultos mayores viven en la soledad e inactivos y lo que es peor en situación de abandono por parte de los mismos familiares por consideraciones erráticas o creencias negativas hacia ellos. (DANE, 2005.)

En lo que respecta a investigaciones realizadas por la Dirección General de Promoción Social del Ministerio de la Protección Social, en su último Censo evidenció que

“aproximadamente el 98 por ciento de los adultos mayores vive con sus familias, lo que evita que padezcan condiciones de abandono, muy a pesar de que el Estado no ha dado una efectividad en la prestación de servicios especializada en la atención del adulto mayor, pero en un alto porcentaje esta población aún siguen siendo vistos y tratados como una carga por parte de sus mismos familiares, y no solo por su improductividad, sino porque su cuidado demanda la atención de otro miembro del hogar generándoles trastornos económicos, hasta llegar a tal punto de tenerlos apartados de sus núcleos sociales y familiares”. (Dirección General de Promoción Social del Ministerio de Protección Social. Censo, 2008).

Este organismo ha sostenido durante muchos años que está en la fase de validación de un proyecto para la génesis de una política nacional de envejecimiento y vejez, debe entrar en una búsqueda de trazar a futuro líneas integrales de acción para la tercera edad, especialmente para los más pobres y los que se encuentran en situación de riesgo de total abandono por factores alternos como se ha mencionado anteriormente. (Dirección General de Promoción Social del Ministerio de Protección Social. Censo, 2008).

El concepto envejecimiento de la sociedad se “refiere a una realidad que sobrepasa la del mero envejecimiento de la estructura demográfica o poblacional causado por el descenso conjunto de las tasas de mortalidad y de natalidad; Incluso va más allá del fenómeno reciente de la «visibilidad» de las personas de edad; hace referencia a los cambios profundos que se están produciendo y se producirán aún más en el próximo futuro que generan lo que denominamos «una nueva vejez», lo que hace referencia a personas que son más sanas, más educadas, y con más recursos que sus predecesoras, y a las consecuencias que ello conlleva”. (IDALMIS CARMENATY Díaz, 2002)

Lo anterior invita a reflexionar si realmente en estos momentos el Estado se encuentra preparada para manejar los factores de riesgo tanto económicos, financieros en cuanto a pensión los que diariamente se ven enfrentados este grupo de población, y si los programas que se están generalizando actualmente cumplen completamente las expectativas del lleno de las necesidades de los que se encuentran en esta región.

La vejez no puede ser asumida como una enfermedad, “pero un hecho si indiscutible es que características específicas del anciano, conllevan a una mayor morbilidad, pues casi todas las afecciones se hacen más frecuentes en la segunda mitad de la vida; además en esta etapa adquieren particular importancia los factores psicológicos y sociales, muy resaltados en los últimos tiempos en la concepción del proceso salud-enfermedad, pues existe una menor capacidad neuropsíquica para la adaptación al medio.”(CARME TRIADO, Feliciano 2007)

Por otro lado, lo que se pretende conceptualmente es dar un reconocimiento a este fenómeno como algo universal en el entorno de su entendimiento que no es un proceso uniforme sino más bien diferenciado, en la medida de que todas las personas envejecen de manera diferente, de acuerdo con factores físicos, psicológicos, económicos, sociales y culturales específicos. (LAGUNA BELIO, 2009)

“En lo que respecta al envejecimiento demográfico o poblacional, este es entendido como un proceso de cambio en la estructura por edades de una población, y se caracteriza por el aumento relativo a las personas de 60 y más años, así como por una reducción en la proporción de niños y de jóvenes. Esto da como resultado un incremento en la edad promedio de la población y, en la esperanza promedio de vida, sobre todo en las edades más avanzadas.” (BUSSE, 1987).

De conformidad con lo citado, el Estado colombiano a través de sus diferentes órganos tiene la necesidad y obligación constitucional de liderar programas tendientes a contrarrestar el impacto de este fenómeno dentro de la estructura social de la comunidad y proporcionar un apoyo integral que facilite la convivencia e inclusión de este sector de la población.

Así, al hablar del envejecimiento individual, hay que destacar que este es un proceso de cambio permanente que comienza con la vida y termina con la muerte y equivale a vivir cada día más tiempo, y es por esto que los niños, jóvenes y adultos, van entrando en ese proceso de envejecimiento, desde la concepción, hasta el proceso de cambios que se van generando con cada año. (TOOD JEWELL, 2007)

Al margen de lo anterior es del caso mencionar también, que el estancamiento de la situación moderna con sus correspondientes beneficios, unido al incremento vital como la prolongación de promedio vital y al aumento selectivo o controlado de la población, como lo son los sistemas de planificación familiar, ha traído como consecuencia, de una parte, una gran población de personas de la tercera edad, cada día en aumento en los diversos países, y de la otra, un gran porcentaje de ella que carece en todo o en parte de las condiciones mínimas de supervivencia y de calidad de vida de acuerdo con su edad, lo que es menor o mayor en los países desarrollados o en vía de desarrollo. (TOOD JEWELL, 2007)

Ciertamente la persona de la tercera edad como la de la primera (los menores de edad) y la segunda (la persona adulta) es una persona frente al derecho, esto es, un sujeto de derecho con derechos iguales o semejantes. Sin embargo, a diferencia de las dos últimas categorías de personas, la tercera edad, debido precisamente a la condición material de su edad, resulta ser una persona completamente especial con derechos que tienen ciertas particularidades.

Siendo coherente con lo arriba mencionado, el artículo 46 de la constitución Política Colombiana prescribe que : “El Estado, la sociedad y la familia, concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad” (COLOMBIA. ASAMBLIEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política Nacional, 1991, Artículo 46.), se está reconociendo implícitamente que, estas últimas personas, no sólo tienen determinadas necesidades frente a aquellos entes, sino que también deben satisfacerlas en su provecho y no en su perjuicio. Es decir, en dicha norma se consagra un interés superior de las personas de la tercera edad frente a otros sujetos de derecho.

Sin embargo, debe recordarse que si bien este es el principio general, lo cierto es que será la ley la que en cada caso concreto defina si para ese asunto existe o no interés especial para los ancianos.

Para aterrizar este marco teórico hay que tener en cuenta que las reformas al sistema general de seguridad social, se puede ver como estos conceptos han constituido, pero llegando a la cruda realidad sobre los sistemas de seguridad en Colombia, vale la pena redundar en aspectos conceptuales que se puedan apreciar desde el punto de vista de la teoría económica, en de se puede justificar por las fallas e imperfecciones intrínsecas de los mercados para garantizar la eficiencia y calidad de los servicios en cuanto al derecho a la pensión. La operación de los mercados relacionados con este tipo de variable puede fallar por cuatro razones fundamentales: Uno es la ausencia de mercados, como sucede con algunos bienes públicos, debido a las externalidades y ausencia de competitividad, como ocurre con los servicios de pensión los cuales van dirigidos a la población con más vulnerabilidad, sobre todo en las etapas de conceptualización en cuanto a la satisfacción de las familias que se encuentran en riesgo de no poder jubilarse; por otro lado el poder de los agentes del mercado, para distorsionar los precios

por encima del óptimo social, como sucede con los monopolios o empresas con privilegios; la poca maximización y el desinterés de beneficios, cuando hay incentivos perversos a la ineficiencia, como suele suceder en muchas empresas de economía solidaria o públicas; y por último vale la pena destacar las asimetrías de información, que originan selección adversa de personas, servicios o instituciones y riesgos morales que llevan a la utilización de servicios por encima del óptimo social.

Desde el punto de vista de las teorías de igualdad y justicia social, se justifica, también, por el hecho de que los servicios de seguridad de alguna manera se comportan como bienes meritorios : la sociedad, en su conjunto, considera que el acceso a los servicios en este contexto se convierten en un derecho de todos los individuos el cual debe ser protegido y garantizado por el Estado. Por consiguiente, además de la eficiencia y la calidad, la equidad constituye un tercer objetivo que justifica la formulación e instrumentación de políticas regulatorias del mercado salud y sobre todo lo referente a pensión se refiere.

En teoría, las opciones de políticas regulatorias disponibles para el logro de estos objetivos son tres : a. Intervención total o estatización de las funciones de planeación, financiamiento y producción de servicios, como ocurre en Cuba; b. Privatizar (no intervención o solución de mercado) todas las funciones de prestación de servicios de salud, como ocurre en Estados Unidos; . Regular el mercado (intervención parcial o solución mixta), es decir, estatizar algunas funciones, tales como el financiamiento y aseguramiento, privatizar otras, tales como la prestación de servicios, y dejar a la discreción de agencias estatales la regulación de dichas funciones, como ocurre en Canadá. En la práctica, sin embargo, no existen modelos puros, y la mayoría de los mercados de salud en el mundo son regulados, en mayor o menor grado por el Estado .

En Colombia, con la regulación Ley 100 de 1993, se creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, lo cual generó cambios profundos a partir de 1994 en la organización, funcionamiento y financiamiento de los servicios de salud (15,16). El modelo resultante, corresponde a un esquema de mercado regulado e integrado por tres subsistemas: subsistema de regulación y control, el cual está organizado en forma descentralizada y comprende los instrumentos de regulación del SGSSS y el actual sistema actual de pensión en Colombia.

Alrededor de las personas de la tercera edad se presenta una convergencia y combinación de varios intereses, en efecto, las personas mencionadas tienen interés tanto formal como material (en lo físico, psicológico, social, moral, etc.), en el reconocimiento de su personalidad y de sus derechos y deberes e igualmente tienen intereses recíprocos frente a la familia, la sociedad y a ser parte de ella y a contribuir con ella y al Estado.

Para efectos jurídicos, es preciso acudir a los criterios legales particulares existentes, como el laboral, y en subsidio, a los que señale la ciencia y la técnica sobre el particular. Lo uno, obedece a que habiéndose consagrado en el derecho laboral un criterio determinante de la edad de la vejez y de jubilación como se ha explicado anteriormente de 60, 62, 55 años de edad, según se trate de hombre o de mujer común, o de indígena, y de ancianidad (desde los 65 años, de edad, se hace necesario no sólo tenerla en cuenta para el régimen de seguridad social pertinente (artículo 33, 133 y 257, de la Ley 100 de 1993).

Desde otro punto de vista investigativo, vale la pena destacar que el proceso de envejecimiento según especialistas como Cardona D, & Estrada A (2003), en sus diferentes investigaciones ha entrado en una interpretación de conocer la relación que existe entre el factor

del deterioro físico progresivo en ocasiones a enfermedades crónicas, generándose con esto una serie de pérdidas de autonomías físicas que van relacionadas con la dependencia.(CARDONA ESTRADA, 2003). Además de esto, como criterio para establecer la tercera edad en materia de familia, porque si bien aquella norma no es preceptiva del asunto personal y familiar de las personas de la tercera edad, no es menos cierto que refleja una edad en que no es posible o no se debiera asumir a plenitud ciertos tipos de trabajos, o sus consecuencias en la capacidad laboral. Luego, será este criterio de disminuciones de capacidades el más idóneo para precisar la tercera edad (Art. 30 de C.C.) tanto más cuanto armoniza con la idea de protección y asistencia.

Desde el punto de vista social es importante que se vislumbren otras concepciones sobre los roles que se han dado en relación al normal desempeño en la evolución del ser humano con sus diferentes procesos de envejecimiento y pasos que van desde la edad joven, hasta el adulto productivo como la etapa del abuelo y jubilado, aunado a estos conceptos del proceso de envejecimiento de las personas, hay que tener en cuenta también que se presenta la separación e independencia de los hijos que los llevan a la disminución de actividades domésticas y sobre todo laborales; situación que resulta más evidente a medida que se incrementa la edad de la persona, tornándose dependientes.

También hay que anotar los diferentes procesos de industrialización, urbanización y modernización que en alguna manera han tratado de modificar los estilos de vida, como el de la familia, que ahora tiene que enfrentarse al debilitamiento de los principales lazos de solidaridad familiar, y lo que es peor aún la falta de un profesional o una compañía femenina, debido que con la inserción de la mujer al área laboral y la reducción del número de hijos, situación común en las familias modernas y por lo tanto se puede pensar que no se estar preparados para cuidar a las personas de la tercera edad en hogares especiales como anteriormente era realizado.

1.3 EL RÉGIMEN PENSIONAL COLOMBIANO

Antes de que entre en función la Constitución de 1991, el Sistema General de Pensiones en Colombia era administrado por múltiples entidades que tenían el monopolio sobre los grupos poblacionales específicos como lo eran los empleados de Telecom, quienes estaban afiliados a Caprecom y sobre las prestaciones que otorgaban.

Con lo anterior, se puede observar que en este servicio se encontraba limitado de manera exclusivamente para el grupo de personas que se encontraran inmersas en una relación laboral.

Al promulgarse la Constitución de 1991 se encontró que a las personas de la tercera edad “el Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia³⁰”. Mientras que el artículo 48 consagró la universalidad y la solidaridad en materia de seguridad social, al dar pie a la creación de un nuevo Sistema de Seguridad Social Integral por medio de la Ley 100 de 1993 la cual estructuró un conjunto de normas y procedimientos, instituciones y principios, cada uno con características diferentes, pero alineado a lo dispuesto en la Carta Política en cuanto a la importancia de la Seguridad Social como valor fundante y fundamental de la Protección Social colombiana. (Bienestar y Macroeconomía 2002-2006).

Frente a todas estas necesidades es imperioso formular elementos críticos que se están dando actualmente en Colombia, y es sobre todo el poder enfrentar las perspectivas que se tienen sobre los adultos mayores quienes se encuentran en unos niveles de prevalencia muy vulnerables en torno a la aplicación de los elementos consensuales sobre la pensión, y que lamentablemente aún no se ha dado una figura profunda que permita coayduvar a dar una generalización más exhaustiva sobre este fenómeno es así como parte de esta población aún se encuentra en estado

de desempleo, pobreza extrema, Al panorama social de desempleo, inestabilidad laboral e informalidad, se sumándole a esto también existe la poca credibilidad en el Sistema y la baja capacidad de ahorro de los colombianos, condiciones que atentan contra la cobertura del mismo. De acuerdo con un estudio elaborado en 2005 por la consultora en Seguridad social y estudios actuariales, Loredana Helmsdorff³³, la razón de la baja cobertura del sistema no es exclusiva de la falta de recursos, pues muchas personas con capacidad de ahorro no están cubiertas por éste pues no creen en las instituciones y prefieren invertir en capital (vivienda, educación, empresa). HELMSDORFF, Loredana, 2007).

Luego de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el 1 de abril de 1994, el sistema provisional, planteado por esta norma, se vio inmerso en un gran déficit fiscal, generado para algunos por el amplio régimen de transición que la Ley 100 había otorgado. Para subsanar este déficit se aprobaron dos reformas pensionales de gran envergadura: la Ley 797 y la 860 de 2003. La primera, en los temas que tocaba la disminución del régimen de transición, fue declarada inexecutable por la Corte Constitucional por vicios de forma.

En Colombia se han tratado de impulsar mecanismos que de alguna manera coadyuven a dar o crear aportes contributivos con el Estado como lo es la realización de una propuesta elaborada por la abogada ANA BEATRIZ OCHOA MEJÍA, quien en su trabajo de tesis grado para aspirar al título de MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES de la Universidad de Alcalá, en Madrid España. Para la elaboración de dicho planteamiento se tuvo en cuenta los principales aspectos para el desarrollo de un sistema previsional más incluyente, sin dejar de lado la importancia de la sostenibilidad financiera del mismo en el tiempo. Así mismo, el análisis y la estructuración tuvieron en cuenta la necesidad de permitir armonizar aspectos financieros y normativos con las características sociales.

La propuesta consiste en la creación de un tercer sistema pensional, el cual debe ser más flexible al otorgar sus prestaciones, ya que éstas no estarán condicionadas en cuanto al monto del beneficio y al de cotización al Salario Mínimo Legal Mensual. Dicho sistema no otorgará pensiones si no Beneficios Económicos Periódicos (BEPs), cuyo monto sería inferior al salario mínimo mensual, como lo estableció el Acto Legislativo 01 de 2005.

Este modelo fue elaborado con base en una población de 300.000 personas, cifra que podría ampliarse en la medida en que el Fondo que administra estos recursos adquiera valor. La población objetivo de este sistema de Beneficios Económicos Periódicos está compuesta por personas que no tengan derecho a ninguna prestación económica entregada por el Sistema General de Pensiones (SGP), es decir, pensión de Vejez, invalidez o sobrevivencia y además por quienes acrediten no poder cotizar al SGP por al menos un (1) SMMLV. La cotización será del 10% del ingreso declarado, sin que éste pueda ser inferior a medio salario mínimo mensual.

La prestación económica entregada por este sistema, como ya se ha anunciado, no es una pensión si no un Beneficio Económico Periódico (B.E.P.), que no está circunscrito, ni en la cotización ni en el monto de la, al salario mínimo. El B.E.P. se entrega de forma vitalicia y de manera personal a su beneficiario una vez haya cumplido con los requisitos. Se excluye la posibilidad de que éste quede en cabeza de alguien más, como sería el caso de la conyugue o de hijos menores, pues esto elevaría los costos del sistema. Una vez el beneficiario del B.E.P. fallece, el saldo de su cuenta individual entra a la masa sucesoral sin considerar el subsidio al que el causante tenía derecho, pues este queda a disposición del Fondo.

De acuerdo a los mecanismos en torno a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPs) tal y como están concebidos actualmente parecen no atender a las necesidades para las que fueron

creados: aliviar los problemas de cobertura y fidelidad del sistema, ya que no responden a la lógica propia de un beneficio pensional, sino más bien a la de una prestación como la cesantía, además de que resultan excluyentes pues están dirigidos a personas que se encuentren dentro de una relación laboral, y de esta forma se deja de lado nuevamente a independientes y trabajadores del mercado laboral informal.

De acuerdo con el contexto del Sistema Pensional, éste debe atender a las prácticas laborales actuales. Para ello se deben permitir aportes cuyo índice de cotización sea menor al salario mínimo, esto con el propósito de que el sistema sea más incluyente. Además, para asumir con mayor compromiso el principio de solidaridad, es menester repensar el papel del Fondo de Solidaridad Pensional, para que sea con los recursos recaudados por dicho fondo que se financien las pensiones, no las cotizaciones, de las personas más pobres de Colombia, y de esta forma estén protegidas contra la imposibilidad de generar ingresos en la vejez. Esto no quiere decir que se deba hacer a un lado el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), pues es el régimen pensional se debe pensar como un todo por lo que no se puede descartar integrar a esta propuesta el FGPM.

Dentro de todo Estado Social de Derecho, la protección de la familia, debe ser principio fundamental de obligatorio cumplimiento sin distinción de la modalidad de conformación de la misma, de manera que cualquier violación a sus derechos atenta contra el orden constitucional. Si el hombre y la mujer, que conforman comunidad doméstica, se encuentran vinculados por el matrimonio, estamos ante la familia legítima o matrimonial, si no existe matrimonio, resulta la denominada familia extramatrimonial o unión marital de hecho.

En el caso en estudio se puede observar como del texto consagrado en la Constitución Nacional en relación al reconocimiento al fenómeno relacionado con la repercusión que se ha tenido sobre los beneficios económicos y periódicos de las personas de la tercera edad es necesario esbozar diferencias que se han dado en torno a las características de los sistemas pensionales en Colombia; entendiéndose con esto que las instituciones asumen como reglas de juego las relaciones económicas y financieras que éstas son diferentes de acuerdo a lo que se esté direccionando en cada país, su base es el poder reducir la incertidumbre y generar interacción, evidenciando con esto una estabilidad para que se pueda mantener una confianza en el sistema jurídico social más que todo se pueda brindar seguridad jurídica (North, 1995).

Pensión de sobreviviente: Esta es una de las prestaciones consagradas en el sistema general de pensiones en Colombia, que tiene como finalidad esencial proteger a la familia de la contingencia de la muerte de un afiliado.

1.3.1 Sistema pensional colombiano.

El modelo pensional vigente en el país tuvo su origen en la Ley 100 de 1993, que empezó a regir el 1 de abril de 1994. Posteriormente, en 2003 se aprobaron dos reformas mediante las leyes 797 y 860, que buscaban reducir el déficit fiscal generado y acortar por el régimen de transición; pero sus artículos pilares los declaró inexecutable la Corte Constitucional, lo que hizo necesaria una nueva reforma que reviviera tales propósitos. En este sentido, es oportuno recordar que el proyecto de reforma pensional presentado por el Gobierno Nacional en 1992 buscaba subsanar estos desequilibrios, pero sus buenas intenciones se quedaron enredadas en la gruesa telaraña del Congreso. En 2005, se introdujo la última reforma al respecto, esta vez en la Carta Política, que

buscaba evitar el juego de “yo hago, tú deshaces” entre Congreso y Corte (mientras el resto padecemos).

Las reformas pensionales en Colombia, al igual que en el resto de países de América Latina, básicamente han sido motivadas por tres razones: baja cobertura, inequidad e insostenibilidad financiera.

1.3.2 Ley 100 de 1993.

La Ley 100 de 1993 crea el "Sistema General de la Seguridad Social Integral", formado por el conjunto de las entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, y por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios.

El mismo elimina el monopolio del Estado en la prestación de los servicios de la Seguridad Social, y establece un sistema competitivo, que implica que cada ciudadano puede elegir voluntariamente la Entidad que le prestara la atención médica o la que le gestionará sus aportes para pensiones.

Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y/o Cesantía.

Son las sociedades de servicios financieros cuyo objeto principal lo constituye la administración de fondos de cesantía creados por la Ley 50 de 1990, de fondos de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad de que trata la Ley 100 de 1993 (fondos de pensiones obligatorias) y de fondos de pensiones de jubilación e invalidez (fondos de pensiones voluntarias), así como de otros patrimonios autónomos en los términos que señala la ley.

1.3.3 Estructura básica del sistema.

El Sistema General de Seguridad Social Integral se compone de los siguientes subsistemas: Pensiones, Salud, Riesgos Profesionales y Servicios Sociales complementarios.

1.3.4 Financiación.

En el Sistema General de Pensiones, el porcentaje de cotización para la pensión de Vejez es del 10%, calculado sobre el Ingreso Base; las correspondientes cuotas se abonan en las cuentas de ahorro-pensional, en el caso de Fondos de Pensiones.

En el caso del Instituto de Seguridad Social (ISS), las cuotas se utilizan para el pago de pensiones de vejez y capitalización de reservas, mediante la constitución de un patrimonio autónomo, destinado exclusivamente a tales finalidades.

Para la financiación de la pensión de Invalidez, la pensión de Supervivientes y los gastos de administración del Sistema, incluida la prima del reaseguro con el Fondo de Garantía, el porcentaje de aporte, tanto para el ISS como para los Fondos de Pensiones, es del 3,5%. El empleador asume el 75% del total de la cotización, y el trabajador el 25% restante.

En el supuesto de los trabajadores independientes, ellos mismos son los responsables de la totalidad de la cotización.

Los trabajadores afiliados, cuyo salario base de cotización sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, deberán cotizar un (1) punto porcentual adicional, a cargo exclusivo del trabajador, con destino al "Fondo de Solidaridad Pensional".

Fondo de Solidaridad

La organización financiera del Sistema establece un enlace financiero y solidario entre los regímenes subsidiado y contributivo, a través del Fondo de Solidaridad y Garantía. El Fondo de Solidaridad y Garantía cuenta con cuatro (4) subcuentas: la de "solidaridad", la de "Compensación", la de "Promoción" y la de "Cuentas Catastróficas". La cuenta de solidaridad del Fondo usa sus recursos para apoyar el desarrollo del Régimen subsidiado, y su progresiva integración y homogeneización con el Régimen.

Riesgos Profesionales

En el sistema General de Riesgos Profesionales, el porcentaje de aportación es variable y se corresponde con la clasificación, efectuada por la Ley, del centro de trabajo o de la empresa del trabajador, o de los diferentes centros, si éstos permiten una diferencia en la actividad que desarrollan, teniendo en cuenta para dicha clasificación los siguientes criterios: Actividad Económica, Índice de Lesiones incapacitantes y cumplimiento de las normas de Salud ocupacional. En este sistema, la totalidad de las aportaciones corren por cuenta exclusiva del empleador.

La cuantía de las cotizaciones a cargo del empleador no podrá ser inferior al 0,348%, ni superior al 8,7% de la base de cotización de los trabajadores.

Pensiones obligatorias.

La pensión Obligatoria es una prestación económica que obtienen los afiliados al Sistema General de Pensiones a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (AFP) y/o del Instituto de Seguros Sociales (ISS), con el fin de garantizar a las personas que cumplan con los requisitos establecidos por la ley (Ley 100/93), el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte.

El Sistema está compuesto por dos Regímenes solidarios y excluyentes entre sí: el tradicional del ISS o Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y el de los Fondos Privados de Pensiones o Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

En el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, las aportaciones de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza el pago a los beneficiarios de la pensión de vejez, de invalidez o de supervivientes, o una indemnización sustitutiva, previamente definida.

El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y de sus respectivos rendimientos financieros y la garantía de la pensión mínima.

Los afiliados tienen derecho al reconocimiento y abono de las pensiones de vejez, invalidez y supervivientes, así como a las indemnizaciones sustitutivas, cuyas cuantías dependen de las aportaciones que hagan los afiliados y, en su caso, sus empleadores, y de los correspondientes rendimientos financieros.

Pensiones voluntarias.

Las pensiones voluntarias son un producto que ofrecen las Administradoras de Fondos de Pensiones, a través del cual el afiliado tiene la posibilidad de ahorrar voluntariamente para complementar la pensión obligatoria que recibe con el Sistema General de Pensiones. Cada AFP tiene la libertad de ofrecer diferentes Fondos de Pensiones Voluntarias.

Dirección y gestión.

El Sistema General de Pensiones está supervisado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el encargado de formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas de empleo, trabajo, previsión y Seguridad Social, dentro de las directrices aprobadas por el Gobierno.

Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se adscriben la Superintendencia del Subsidio Familiar, el Instituto de Seguros Sociales -ISS-, la Caja Nacional de Previsión Social, el Servicios Nacional de Aprendizaje -SENA- y el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.

A la Superintendencia Bancaria corresponde el control y la vigilancia de la administración de cada uno de los Regímenes del Sistema General de Pensiones, vigilando que éstos cumplan con sus obligaciones.

1.3.5 Formas de pensionarse en Colombia.

Las tres formas de pensionarse en Colombia

El régimen de pensiones en Colombia ha sido creado con el ánimo de garantizar a la población el amparo en la vejez y ante eventualidades como invalidez o muerte. Entérese de las condiciones exigidas para acceder a cada una de ellas. Pocos sectores en Colombia son tan dinámicos y cambiantes como el de las pensiones. Ante los constantes cambios que ha sufrido el sistema pensional en el país, en especial en el último año, son muchas las inquietudes e

interrogantes que los colombianos van acumulando en torno a este tema. ¿Cuánto tiempo se debe cotizar? ¿Qué condiciones hay para reconocer una pensión por invalidez? ¿Quiénes pueden reclamar una pensión por sobrevivencia? A continuación algunas de las respuestas.

Pensión de vejez

Según el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003 para acceder a una pensión de vejez en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, que rige al Seguro Social, los afiliados deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad si es mujer y 60 años si es hombre, sin embargo a partir del primero de enero de 2014 la edad se incrementará a 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
2. Haber cotizado un mínimo de semanas, así: 1.200 en 2011, 1.225 en 2012, 1.250 en 2013, 1.275 en 2014 y 1.300 a partir de 2015.

Según el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que rige a los fondos de pensiones, pueden acceder a la pensión de vejez al cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener en su cuenta de ahorro individual un capital que les permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993, reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE. Para el cálculo del monto de la pensión se tienen en cuenta los rendimientos generados por la AFP y el valor del bono pensional, cuando hubiere éste.

. A cualquier edad.

Pensión por invalidez

Se otorga a la personas que por cualquier causa de origen no profesional, y no provocada intencionalmente, pierden el 50% o más de su capacidad laboral , sin embargo el afiliado debió haber cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

Los menores de 20 años de edad sólo deben acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.

Dependiendo de la gravedad de la invalidez se determina el monto a recibir de la pensión: con el 50% al 65% de pérdida de capacidad laboral se recibirá el 45% del ingreso base de cotización con un incremento de un 1.5% por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500. Si se pierde el 66% o más de la capacidad laboral se recibirá el 54% del ingreso base con un incremento de un 2% por cada 50 semanas adicionales a las primeras 800. Ninguna pensión puede ser inferior a un salario mínimo legal vigente ni superior al 75% del ingreso base de cotización.

Pensión de sobrevivientes

Esta pensión puede otorgarse a los beneficiarios del pensionado o del afiliado que fallezca habiendo cotizado como mínimo 50 semanas dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de su muerte. Si la persona que fallece ya estaba pensionada por vejez, el monto de la pensión será del 100% del monto de lo que estaba recibiendo pero si el fallecido aún se encontraba

aportando será el 45% del ingreso base de cotización incrementando el 2% por cada 50 semanas adicionales a las 500 primeras, sin que exceda del 75% del ingreso base de cotización.

Los beneficiarios solo podrán ser los siguientes:

1. El cónyuge o compañero(a) permanente con cinco (5) años de convivencia.
2. Los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años y hasta 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y que, en el momento de la muerte del afiliado o pensionado dependan económicamente de éste.
3. Los hijos inválidos con dependencia económica del fallecido.
4. Los padres, si dependían económicamente del causante, cuando no haya hijos ni cónyuge.
5. Los hermanos inválidos que dependían económicamente del pensionado o afiliado.

Estas son las tres pensiones que establece el Sistema General de Seguridad Social creado por la Ley 100 de 1993, que rige a partir del primero de abril de 1994 para todos los habitantes del territorio colombiano excepto para las personas que cumplían los requisitos exigidos a esa fecha, para los beneficiarios del régimen de transición y para las personas exceptuadas del Sistema: Policía Nacional, Fuerzas Militares, Magisterio y Ecopetrol.

Fondo Popular Voluntario de Ahorro para la Vejez.

Para ofrecer alternativas de aseguramiento contra las contingencias derivadas de la vejez a la población de difícil cobertura (por sus bajos recursos o inestabilidad laboral), es fundamental comprender su racionalidad frente a la previsión. Con el fin de realizar un primer acercamiento a

esta realidad y ante la falta de información disponible, se efectuó una encuesta dirigida a personas cuyo empleo es clasificado dentro del sector informal de la economía, principalmente por las siguientes características: trabajador independiente o por cuenta propia, trabajador familiar, del servicio doméstico o empleado en pequeños negocios como ventas ubicadas en la calle o locales comerciales con pocos empleados (por ejemplo tiendas de barrio).

Con las encuestas realizadas, no sólo se comprobaron las hipótesis planteadas por diferentes autores respecto al aseguramiento del llamado “sector informal”, sino que se indagó sobre la verdadera posibilidad de ampliar la cobertura de la protección social para la vejez mediante la implementación de una forma alternativa de ahorro. Aunque existe un segmento importante de la población que no se interesa por la previsión para la vejez, las condiciones actuales del sistema pensional y la situación socioeconómica del país sugieren que es necesaria la creación de un fondo de ahorro para la vejez independiente del sistema pensional, que no otorgue “pensiones” sino auxilios ni requiera afiliación al Sistema General de Pensiones, y que ante todo busque “privilegiar el trabajador, no el empleo”. Es importante el diseño de mecanismos para incentivar a este sector de la población a afiliarse y se debe estar preparado para recorrer un largo camino hacia una cultura del ahorro, dado que como se expuso anteriormente existe una importante porción de este universo que no estaría dispuesta a realizar un ahorro para la vejez. En esta sección del trabajo se propone la creación del “Fondo Popular Voluntario de Ahorro para la Vejez” que brinde una alternativa de ahorro con beneficios a largo plazo. La propuesta aquí planteada dista de ser verdad revelada y es una invitación a abrir la discusión.

En esta sección del trabajo se propone la creación del “Fondo Popular Voluntario de Ahorro para la Vejez” que brinde una alternativa de ahorro con beneficios a largo plazo. La propuesta aquí planteada dista de ser verdad revelada y es una invitación a abrir la discusión.

1. Características del Fondo

El Fondo Popular Voluntario de Ahorro para la Vejez, es un mecanismo de ahorro voluntario dirigido a aquellas personas que no tienen capacidad de ingresar al sistema pensional, especialmente los trabajadores independientes de bajos ingresos, y a los afectados por la movilidad laboral, con el fin de aliviar su situación económica en la vejez y principalmente crear una cultura de ahorro. Dicho fondo operará de una forma similar al fondo obligatorio, donde cada participante tendrá una cuenta de ahorro individual que se capitalizará durante todos los años que realice los aportes; sin embargo, habrá diferencias fundamentales en cuanto a las reglas por las cuales se regirá:

- No habrá un tiempo límite dentro del mes para efectuar los aportes.
- No existe sistema de cobranzas por parte de las administradoras del Fondo.
- No se manejarán extractos de cuentas, haciendo su costo más barato que el sistema general.
- No será obligatorio cotizar a salud

En cuanto a la parte tributaria los aportes tendrán el mismo tratamiento de las cotizaciones obligatorias de la seguridad social, es decir, libre de toda clase de impuestos. Debido a las características expuestas es indiscutible la necesidad de una supervisión estatal para evitar la evasión de quienes realmente puedan aportar al Sistema de Seguridad Social Integral.

Las instituciones que manejen el fondo deben buscar mecanismos de recaudo, de modo que se facilite el acceso a toda la población; para tal efecto se pueden desarrollar convenios con

entidades como empresas de mensajería o empresas de servicios públicos domiciliarios en los casos en que se considere conveniente.

Para incentivar este mecanismo de ahorro, al final de la vida laboral (65 años) el Fondo de Solidaridad Pensional-Subcuenta de Solidaridad completaría el capital ahorrado con un auxilio, estimado como un porcentaje del capital faltante para ajustar una pensión igual al salario base de liquidación de toda la vida o máximo el 70% del salario mínimo vigente.

2. Afiliación y cobertura

El Fondo Popular Voluntario de Ahorro para la Vejez permitirá:

- Afiliación voluntaria para personas no cubiertas por el Sistema General de Pensiones, especialmente trabajadores de bajos ingresos y personas afectadas por la movilidad laboral producto de los ciclos económicos.

- Facilidad de afiliación y desafiliación, para evitar tiempos de cotización simultáneos con el

Sistema General.

- Se pueden permitir cotizaciones variables durante un mismo año, sin que sobrepasen los límites permitidos de ingreso asegurado.

3. Cotizaciones

Las cotizaciones serán establecidas tomando como base para el aporte un mínimo equivalente al costo de vida (determinado por la Línea de Indigencia) y como máximo el 80% de un salario mínimo mensual con el fin de evitar selección perversa. El porcentaje de cotización

será equivalente al porcentaje de aporte del Sistema General de Pensiones, descontando los costos de administración, los costos de seguros previsionales y el porcentaje destinado a solidaridad para garantía de pensión mínima, pero incrementado en 0,5% que es el costo de administración para este fondo.

4. Beneficios

- La trayectoria de afiliación en este fondo, será considerada como garantía crediticia por las entidades financieras y del sector real.
- Después de 5 años de cotización en el Fondo Popular Voluntario, el afiliado podrá retirar parte de los recursos ahorrados en su cuenta individual, para usos específicos como vivienda, educación, negocio propio o grave calamidad doméstica.
- Las personas que al llegar a los 65 años hayan cotizado un tiempo mínimo de 10 años en este fondo, recibirán un subsidio monetario, proveniente del Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Solidaridad, cuyo monto será un porcentaje del capital faltante para adquirir una renta vitalicia. No habrá lugar a subsidio si la persona decide retirar en un solo pago el capital ahorrado.
- Se brindará la posibilidad de adquirir un seguro de vida grupo, por el cual deberá pagar un valor adicional al monto aportado por concepto de cotización, pero que es más económico que un seguro de vida individual.

1.4 MARCO LEGAL

Es importante tener como marco normativo el ordenamiento jurídico colombiano, apoyado de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la legislación civil y constitucional

Constitución Política de 1.991 de Colombia, y sus diferentes reformas en torno al tema.

Código Civil Colombiano: El cual comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos de los particulares, por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles.

Ley 100 de 1993: Por La cual se crea el Sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Artículo 47, que trata de: Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes, El sistema pensional anterior a la ley 100, con serias deficiencias estructurales, demostró ser financieramente inviable, inequitativo y de imposible expansión. Si bien, la constitución de 1991 reconoció como pilares de la seguridad social los criterios de universalidad, solidaridad y eficiencia, en el tema pensional no se ha garantizado su cumplimiento. En síntesis, el problema que se quiso resolver con el sistema general de pensiones de 1993, llamada ley 100 la cual continua vigente (con algunas reformas), con el agravante de estar cumpliendo todas las predicciones de catástrofe fiscal y social planteadas por autores al transcurso del tiempo.

Disposiciones legales recientes en el país. Las políticas nacionales vigentes mencionadas se hacen operativas a través de leyes en las que se define cómo se ejecutan en cuanto a la función de

las entidades responsables; las disposiciones legales más importantes en la actualidad son: la ley 1251 de 2008, la 1276 de 2009 y la 1315 de 2009.

A continuación, se presenta una breve síntesis de cada una de ellas:

□ Ley 1251 de 27 de noviembre de 2008.

Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los Adultos Mayores. Tiene como objeto proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los Adultos Mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia, y regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral a las personas en su vejez, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Nacional, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, el plan de Viena de 1982, los deberes del Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los diversos tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia.

□ Ley 1276 de enero 5 de 2009 (Congreso de Colombia. Diario Oficial 47.223) A través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001, y se establecen nuevos criterios de atención integral del Adulto Mayor en los centros vida.

CAPÍTULO 2. SITUACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA SOCIEDAD ACTUAL

El acelerado ritmo que se vive actualmente en las ciudades, deja fuera de la corriente a las personas mayores, y que de alguna manera se enfrentan de manera indiscriminada al final de su etapa productiva y su rol frente a una sociedad que cada vez es más exigente, y asignándole el vacío existencial de su posición social, la incertidumbre económica y la soledad dada por el aislamiento. De esta manera la sociedad cargada de preceptos negativos con respecto al anciano, margina a este sector de la población.

Esta realidad social daña severamente la autoestima de la persona mayor. La desvalorización está dada por la falta de sentido de sus vidas y la carencia de una función social luego de toda una vida de servicios a la comunidad a través de su trabajo y el respeto de sus semejantes.

Esta marginación del adulto mayor, a su vez distancia a los jóvenes del anciano privándolo de las experiencias y sabiduría del que ha vivido mucho. Más aún, los aleja de la posibilidad de entender a la vejez como parte de la vida, ayudándolos de esta manera, a prepararse planificando su futuro para no dejar relegadas a otros, decisiones que deben ser personales.

Gran parte del deterioro físico y mental que se evidencia en algunos ancianos tienen su origen en el paulatino aislamiento del acontecer diario en la comunidad y el país. La carencia de un rol profesional y/o laboral desempeñado por tantos años con el que se identifican como personas, da cabida a la depresión, la reclusión y gradualmente a la falta de interés en el arreglo

personal, en alimentarse balanceadamente y en mantener una vida social activa.

2.1 ASPECTOS DE VULNERABILIDAD QUE AFECTAN A LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

De acuerdo con los aportes realizados por diferentes especialistas en el tema del adulto mayor se puede observar que para ellos en su conceptualización explican que el envejecer, o el prolongar la vida se encuentra en estrecha relación con una serie de factores psicológicos, fisiológicos y socioculturales y el ser humano no se encuentra en capacidad o preparado para enfrentar a futuro esta condición por diferentes factores alternos, sobre todo, si muchas personas a lo largo de su vida no han podido en el límite de sus quehaceres, acceder una efectiva pensión de vejez, o una liquidación que les permita disfrutar “una vejez feliz”.¹

En lo que respecta a los cambios a que se ven sometidas las personas en su proceso de envejecimiento este se da no sólo dentro de cada individuo sino también en las personas que están a su alrededor, determinados por diferentes aspectos relacionados con la situación económica de las familias, el entorno cultural y social, el desplazamiento forzado, son aspectos que agudizan esta problemática o fenómeno que se da dentro del contexto legal y social de la protección del adulto mayor.

La anterior situación puede ser agravada con las dificultades inherentes que enfrenta el adulto mayor al tratar de llevar la vida a la que estaba acostumbrado anteriormente y al no lograrlo se sienten personas inútiles y muchas veces menospreciados por una sociedad que, a

¹CARDONA, Doris, ESTRADA, Alejandro. Calidad de vida y condiciones de salud de la población adulta mayor de Medellín. Artículo publicado, 2007.

pesar de los grandes cambios que se han venido suscitado durante los últimos años, ha ido perdiendo la sensibilidad y la disponibilidad de generar procesos reafirmantes en miras a que no se les sigan violando sus derechos.

Así las cosas, es de suma importancia poner en marcha políticas que vayan en favor de una realidad jurídica, social y legal en materia de protección en este sector de la población de Colombia, específicamente en la ciudad de Barranquilla, y de esta manera el ser multiplicadores del cambio de concepto que se tiene sobre el adulto mayor y el rol de éste en el entorno familiar y social.

Por otro lado, y de acuerdo con los cambios y evolución suscitados con el advenimiento en el siglo XXI, los avances de la tecnología y del conocimiento científico, se aumentó la expectativa de vida de la población, lo que generó una revolución demográfica, hecho para el cual los diferentes Estados no se encuentran aún preparados para asumir este reto, y se han olvidado de algo importante, como es el condicionar en su marco legal un mejoramiento en las garantías y calidad de vida a esta población vulnerable.

Además de lo anterior, se ha podido apreciar que los países industrializados cuyo crecimiento poblacional de adultos mayores se desarrollaron en forma gradual, están en mayor capacidad de adaptarse y de ajustar los planes de acción ya proyectados para esta situación.

Así las cosas, tanto el Estado como los entes privados tienen la obligación de prestar la asistencia y la atención especial, independientemente de que la persona que lo solicite esté al día con el pago de sus aportes o que esté o no afiliado a algún sistema o un mecanismo que les

garantice su seguridad social, esto quizá debido a los diferentes factores como se ha explicado anteriormente como el económico y cultural entre otros. También en lo que cabe en el contexto legal, se hace necesario continuar con la atención cuando se trata de enfermedades de alto costo y enfermedades catastróficas o ruinosas en caso tal que estas requieran seguir con el tratamiento durante cierto tiempo y esto sea vital para el adulto mayor.

Teniendo en cuenta lo expresado en los párrafos anteriores, es claro que el por qué del problema se da por el incumplimiento de los presupuestos básicos en la atención especializada al adulto mayor, por lo que se tiene que recurrir a mecanismos de protección especial como la acción de tutela, que eficazmente protege el derecho a la salud, que según el análisis de la jurisprudencia de la Corte, en la mayoría de sus sentencias, por estar en conexidad con el derecho a la vida se convierte en materia y elemento fundamental.

Es evidente que en Colombia, así como en cualquier país latinoamericano, existen emergentes transformaciones poblacionales, culturales, epidemiológicas, ecológicas, tecnológicas, con un ambiente poco propicio para lograr objetivos, a causa de la inestabilidad política y económica que se ha generalizado actualmente, así como también los riesgos que se han dado en torno al conflicto interno, la incertidumbre institucional la inseguridad jurídica, la violencia que dejan como secuelas el envejecimiento de la población a un ritmo mayor que en otros países. Finalmente están los mecanismos de protección o legales los cuales en su contexto legal e interno no son precisos o efectivos, lastimosamente se puede observar cómo en “Barranquilla aún se percibe un ambiente de poca atención a esta población, y aún se puede

observar cómo en muchos barrios aún siendo estos de alto nivel económico, se ve a la población adulta mayor en la calle o durmiendo en las ceras de las casas”.²

Es quizá la formulación de este paradigma una respuesta a los diferentes procesos e interpretaciones que deben estar direccionados de manera precisa a esta población, que cada vez carece de elementos y garantías en donde ellos puedan ubicarse con efectividad para suplir sus necesidades de vulnerabilidad a las que se han visto sometidas durante estos últimos años en la ciudad de Barranquilla.

También hay que considerar que los niveles de vulnerabilidad son más críticos por situaciones alternas como el fenómeno del narcotráfico, la disminución del empleo y la poca capacidad de obtener ingresos adecuados luego de pasar a los 45 años de edad y los diferentes regímenes de pensión aplicadas en Colombia, que para muchos no es muy fortalecido.

De otra parte, el aumento de la pobreza y la miseria absoluta, son elementos que de alguna manera limitan el poder llegar de forma efectiva a la edad adulta con todas las garantías que se requieren para tener una vida digna a las que aspiran muchos adultos mayores en la región Caribe.

Así las cosas, no se puede olvidar que los Adultos Mayores es un grupo de población que va en crecimiento rápidamente, y que debido a esto deben utilizar con mayor frecuencia los servicios sanitarios y además tiene menos probabilidad de contar con grupos sociales "naturales"

²MOJICA JOSÉ Alberto. Redactor de Diario “El tiempo”. “Hijos que maltraten o abandonen a sus padres deberán pagar con cárcel: Simón Gaviria Muñoz”, Proyecto de Ley, 2009. 6. “Senador Benedetti presentará proyecto de Código del Adulto Mayor”,

de apoyo lo que los coloca en situación de vulnerabilidad por los diversos peligros de orden físicos, psicológicos, económicos y sociales a los que se ven expuestos, actualmente el Adulto Mayor en la ciudad de Barranquilla en los años 2010 a 2011, que habitan en esta ciudad.

Es importante tener en cuenta que el adulto mayor tiene derecho al desarrollo de la libre personalidad, a pesar de que este proceso humano tiene una singular importancia en la adultez, la personalidad del individuo de la tercera edad con sus respectivas particularidades (principalmente en la que atañe a la valoración humana, a los sentimientos, los afectos, la justicia, etc.) tiene relevancia en el tratamiento social de este sujeto, debido a que este reconocimiento jurídico debe permitirle su realización personal de acuerdo con sus condiciones. Así, por ejemplo, tendrá que permitirle que pueda desarrollar su actividad de tipo laboral, educativa, familiar, etc., todas de acuerdo con su edad así como los de integración a la vida activa y comunitaria pertinente (Arts. 16 y 5º Constitución Política de Colombia).

Por último debe destacarse que es de interés especial manejar mecanismos que apunten a favor de las personas de la tercera edad, constituye una base fundamental para el establecimiento del alcance real de los derechos, deberes y protecciones, pues, es el que permite darle efectividad y la igualdad necesaria (Arts. 46 y 13 de la Constitución Política).

Los diversos servicios destinados a garantizar la integralidad a las personas de la tercera edad, pueden ser de protección y asistencia, sin perjuicio de las clases sociales o estratificación, tal como lo provee el artículo 46 de la Constitución Política al señalar que el Estado, la sociedad, y la familia deben concurrir para prestarle a las personas de la tercera edad, “la protección y la asistencia”, está prescribiendo la necesidad de la prestación de dar servicios a favor de aquellos

sujetos. De un lado, el de protección, o sea, el de otorgamiento de los beneficios o garantías necesarios para el desarrollo de sus condiciones personales y del otro, el derecho llamado de asistencia consistente en el otorgamiento público o particular, (asistencia pública o particular), del cuidado y atención que por su edad requieran.

A través del tiempo, el Estado colombiano ha tratado de diseñar fórmulas tendientes a generar proposiciones que puedan direccionar a las diversas organizaciones, entidades, instituciones y dependencias de acuerdo a su función y responsabilidad social, para liderar activamente diferentes programas y acciones en beneficio del bienestar del adulto mayor, sin embargo, se puede notar con preocupación que, a pesar de pertenecer todas a un mismo municipio, ejecutan dichos programas de una manera independiente.

De otra parte, la poca eficiencia en la comunicación y relación entre dichas organizaciones, ha generado trastornos y un inadecuado manejo y seguimiento a los diferentes procesos que se llevan a cabo actualmente y que tienen que ver con el adulto mayor, así como los programas que se estuvieron ejecutando en las diferentes administraciones en materia a este tema en la ciudad de Barranquilla.

Además de lo anterior, no se han realizado investigaciones profundas acerca de la problemática de los niveles de vulnerabilidad del adulto mayor lo cual ha traído como consecuencia que existan carencias de carácter legal y jurídica así como una planeación estratégica en donde se encuentren alineadas todas las acciones referentes al tema, provocando con esto que cada una de las entidades trabajen por su cuenta, no se aúnan esfuerzos, como tampoco exista una apropiada administración de los diferentes recursos, principalmente

económicos, en la participación de las variables para coadyuvar al fortalecimiento de esta población.

Con el correr de los años, ha cambiado la concepción de la tercera edad, en las actuales sociedades, se ha generado un cambio de actitud de las personas jóvenes con respecto a las personas de mayor edad, dándole la importancia que el anciano se merece dentro del núcleo familiar, escuchándolo de manera respetuosa y atenta, sin considerarlo como un niño al que hay que hacerle todo, sino, incentivarlo a ser lo más independiente posible, darle responsabilidades acorde a sus estado de salud, hacerlo participe de las actividades de la casa, inculcándole a los niños el respeto por ellos, para que de esta manera se pueda tener una visión más comprensiva y exacta de su realidad.

En este orden de ideas es indispensable el tener presente que una protección integral a las personas de la tercera edad es, de una parte, un reconocimiento como persona frente al derecho (art. 14 Constitución Política de Colombia), y en consecuencia, su capacidad de goce para adquirir derechos y obligaciones de cualquier tipo. (Art. 13 Constitución Política). Así mismo, tales sujetos gozan de la capacidad de ejecución, que le permita desde los 18 años de edad la celebración directa de negocios jurídicos (Arts. 98 Constitución Política y Ley 27 de 1977). Sin embargo, lo anterior no es óbice para destacar que esta capacidad negocial se mantiene en la tercera edad, aunque demuestre debido a sus condiciones, mayores posibilidades reales de celebración de negocios jurídicos gratuitos (V. gr. Donaciones y testamentos) y debilitamiento gradual de dicha capacidad hasta el momento de la senilidad, en que ordinariamente sobreviene la demencia senil.

A las personas de la tercera edad no solo se le reconocen derechos, deberes y limitaciones, es necesario que unos y otros sean “reales y efectivos” (Art. 13, inc. 1º y 2º, Constitución Política de Colombia), lo cual impone la promoción de sus condiciones para que dichos deberes y derechos se incrementen y alcancen la relevancia que se requiere. Se puede observar entonces, algunas protecciones concretas que suelen entenderse concedidas a las personas de la tercera edad, la mayoría de las cuales se sobrentienden, pero algunas requieren de un desarrollo legal concreto.

De conformidad con lo anterior, es importante tener en cuenta el derecho a la vida, en la tercera edad, si bien implica una serie de aspectos como el tener, conservar, desarrollar y defender ese estado en sus diversas manifestaciones, lo cierto es que se toma una especial significación (en mayor o menor grado, según el caso), la facultad de conservación y disfrute del restante período de vida (más corto que el vivido), la cual no obstante su ignorancia, debe tener prioridad en su ejercicio y mayor seguridad y defensa en su existencia. Además, esa condición vital no sólo hace viable el otorgamiento de testamentos y donaciones, sino también la efectiva reclamación del derecho a morir dignamente.

En cuanto a la integridad corporal, es en la tercera edad, donde este derecho adquiere especial significación, particularmente en lo relativo al cuerpo, a la mente, a la salud y a la sexualidad.

Con relación al cuerpo físico, los miembros de la tercera edad, cualifican su derecho a la integridad física porque al paso que aceptan el inevitable envejecimiento de su entidad corporal con todas sus consecuencias (v. gr. Disminución de capacidades, asunción de mayores riesgos,

etc.) lo cierto es que dicho derecho se concentra prioritariamente en la conservación, defensa, prolongación y mejor aprovechamiento de su cuerpo y energías (en mayor o menor grado, según el caso) en lo que le resulte más útil a sus demás actividades individuales, familiares, y sociales, como lo es el trabajo, la ocupación, el trabajo, convivencia, recreación, deporte, etc., evitando su afectación.

En cambio, las personas de la tercera edad por lo menos en la etapa de la vejez, acentúan su mayor capacidad psíquica particularmente en la actividad intelectual y la valoración a las personas y a las cosas, por lo que le asiste el derecho social se le debe permitir que, de acuerdo con sus condiciones y capacidades, pueda aprovechar al máximo aún en el descenso o en las disminuciones graduales, el desarrollo de sus facultades mentales en las producciones del intelecto, las actividades y valoraciones humanas y ante todo, en las orientaciones culturales, tradicionales y familiares pertinentes.

Así mismo, correlativamente a sus limitaciones y deterioros graduales y ordinarios de las condiciones de salud física y mental, el derecho a la salud se convierte para los miembros de la tercera edad en una de las de mayor significación al lado del de la vida, debido a la frecuencia de enfermedades, deterioros y riesgos que tales deficiencias encierran para la vida. De allí que el derecho a la salud, además de necesario se torne eminentemente preventivo de riesgos de accidentes y enfermedades, lo que de suyo, impone mayores prevenciones y prioridades en su atención correspondiente, así como en la especialidad de esta última debido precisamente a la vejez y a la ancianidad.

La vejez no puede ser asumida como una enfermedad, “pero un hecho si indiscutible es que características específicas del anciano, conllevan a una mayor morbilidad, pues casi todas las afecciones se hacen más frecuentes en la segunda mitad de la vida; además en esta etapa adquieren particular importancia los factores psicológicos y sociales, muy resaltados en los últimos tiempos en la concepción del proceso salud-enfermedad, pues existe una menor capacidad neuropsíquica para la adaptación al medio.”³

Si la dignidad humana coincide con el mérito o valor supremo que tiene y debe tener la calidad humana (en lo espiritual, racional, moral, social, etc.) la vida de todo hombre (por lo que se le atribuye la calificación de ser humano para explicar y orientar su existencia y la del universo) y la muerte no es más que un hecho y un momento importante en la existencia de los hombres, hace parte de la vida digna del individuo, ejercer el derecho por sí mismo y no por terceros, pero tal facultad excluye las penas de muerte, el suicidio y cualquier acto propio o de tercero que, en vez de representar la dignidad de la vida humana, reflejan por el contrario un atentado contra ella misma.

Hay que mencionar también que el estancamiento de la situación moderna mencionada con sus correspondientes beneficios, y unido al incremento vital como la prolongación de promedio de vida y al aumento selectivo o controlado de la población, como lo son los sistemas de planificación familiar, ha traído como consecuencia, de una parte, una gran población de personas de la tercera edad, cada día en aumento en los diversos países, y de la otra, un gran

³ CARME TRIADO, Feliciano villar, modelos de envejecimiento y percepción de cambios en una muestra de personas mayores de Barcelona 2007 n°73, 43-55 pág. 2

porcentaje de ella que carece en todo o en parte de las condiciones mínimas de supervivencia y de calidad de vida de acuerdo con su edad, lo que es menor o mayor en los países desarrollados o en vía de desarrollo.⁴

En el contexto del derecho a la familia (seguridad familiar), le ha correspondido al derecho asumir el estudio organizado y sistematizado de este fenómeno de las personas de la tercera edad, pero dentro de las diversas disciplinas jurídicas, le ha correspondido al derecho de familia particularmente en lo que se refiere a la seguridad familiar, asumir su estudio, por dos razones como lo son : la primera consiste en la necesidad y derecho a una familia, así como promueve directamente la prolongación de la vida y vela por los planes de control de la natalidad y la mortalidad infantil, de igual manera tiene que asumir el desarrollo del derecho para la familia de las personas de la tercera edad, debido a que ésta vuelve a constituir para estas personas la organización más fundamental, de tal manera que en menor o mayor grado sus vidas y actividades giran alrededor de su núcleo familiar.

Y la segunda razón radica en que dadas las condiciones especiales del anciano carentes de un espacio físico e inclusive en la vida jurídica, se hace indispensable que haya un estudio y si fuere el caso, una regulación especial del anciano frente a la familia, a la sociedad y al Estado, sector este del derecho que, por girar prioritariamente en torno al adulto mayor como individuo y complementariamente como miembro de una sociedad (mucho más amplio que el campo

⁴ Ibid. P. 5

estrictamente laboral) deba corresponder a una sección de la seguridad familiar que a su vez, pertenece al derecho de familia.

Ciertamente la persona de la tercera edad como la de la primera (los menores de edad) y la segunda (la persona adulta) es una persona frente al derecho, esto es, un sujeto de derecho con derechos iguales o semejantes. Sin embargo, a diferencia de las dos últimas categorías de personas, la tercera edad, debido precisamente a la condición material de su edad, resulta ser una persona completamente especial con derechos que tienen ciertas particularidades.

En concordancia, se puede apreciar entonces, que se da un sentido especial, y que cuando el precepto antes citado prescribe que : “El Estado, la sociedad y la familia, concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad”⁵, se está reconociendo implícitamente que, estas últimas personas , no sólo tienen determinadas necesidades frente a aquellos entes, sino que también deben satisfacerlas en su provecho y no es su perjuicio. Es decir, en dicha norma se consagra un interés de la persona de la tercera edad consistente en todo aquello que puede aprovechar o perjudicar a la persona de la tercera edad frente a los demás.

Además de lo anterior, es necesario canalizar las ideas plasmadas en el sentido de que no se trata de un interés común, sino que se debe tener cuidado en el aprovechamiento o el perjuicio que se cause, sino que se trata de un interés especial, porque solamente surge por razón de las condiciones especiales que estructuran la tercera edad, a fin de obtener lo que le aproveche y eliminar lo que le perjudique en amenaza o daño. De allí que la especialidad de este interés si bien no implique prevalencia o superioridad frente al de los demás, ni mucho menos al de los menores (interés que, como más adelante se verá, sigue siendo superior al de los ancianos) no lo es menos que impide que se le aplique el interés general o común de las personas cuando en

⁵ COLOMBIA. ASAMBLIA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política Nacional, 1991, Artículo 46.

determinado asunto a ellos no se les aplica la regla general sobre el punto mismo, no por ser aquella superior o inferior a los demás, sino simplemente por ser especial y en consecuencia, excepción de la regla general.

Sin embargo, debe recordarse que si bien este es el principio general, lo cierto es que será la ley la que en cada caso concreto, la que defina sí para ese asunto existe o no interés especial para los ancianos.

Se puede observar que existe una cualidad integral de interés de las personas de la tercera edad que permite la convergencia y combinación de varios intereses, en efecto, las personas mencionadas tienen interés tanto formal como material (en lo físico, psicológico, social, moral, etc.), en el reconocimiento de su personalidad y de sus derechos y deberes e igualmente tienen intereses recíprocos frente a la familia, la sociedad y a ser parte de la misma y a contribuir con ella y al Estado.

Para efectos jurídicos, es preciso acudir a los criterios legales particulares existentes, como el laboral, y en subsidio, a los que señale la ciencia y la técnica sobre el particular. Además de esto, como criterio para establecer la tercera edad en materia de familia, porque si bien aquella norma no es preceptiva del asunto personal y familiar de las personas de la tercera edad, no es menos cierto que refleja una edad en que no es posible o no se debiera asumir a plenitud ciertos tipos de trabajos, o sus consecuencias en la capacidad laboral. Luego, será este criterio de disminuciones de capacidades el más idóneo para precisar la tercera edad (Art. 30 de C.C.) tanto más cuanto armoniza con la idea de protección y asistencia.

Así las cosas, desde el punto de vista social es importante que se vislumbren otras concepciones sobre los roles que se han dado en relación al normal desempeño en la evolución del ser humano con sus diferentes procesos de envejecimiento y pasos que van desde la edad joven, hasta el adulto productivo como la etapa del abuelo y jubilado, aunado a estos conceptos del proceso de envejecimiento de las personas, hay que tener en cuenta también que se presenta la separación e independencia de los hijos que los llevan a la disminución de actividades domésticas y sobre todo laborales; situación que resulta más evidente a medida que se incrementa la edad de la persona, tornándose dependientes.

También hay que anotar los diferentes procesos de industrialización, urbanización y modernización que en alguna manera han tratado de modificar los estilos de vida, como el de la familia, que ahora tiene que enfrentarse al debilitamiento de los principales lazos de solidaridad familiar, y lo que es peor aún, la falta de una compañía femenina, debido a la inserción de la mujer al área laboral se puede pensar que no se está preparados para cuidar a las personas de la tercera edad en hogares especiales, como anteriormente era realizado.

Para muchos especialistas en el campo de investigaciones del tema, específicamente en torno a la “proporcionalidad de los intereses inherentes al adulto mayor se le ha dado un valor considerable al individuo que en cierto momento de su vida ha alcanzado esta edad, se le considera una persona única, histórica e irrepetible en quien se presenta un deterioro biológico,

intrínseco, deletéreo, progresivo, programado e irreversible, producto de un deterioro bioquímico y psicológico, con disminución de las capacidades de adaptación al medio interno y externo”.⁶

Lo anterior invita a reflexionar sobre el carácter proporcional, sobre la subsistencia y por tanto el total o relativamente solvente para su propio sostenimiento, y desde luego, para el aporte al sistema de seguridad social según el Art. 46, inc. 2º Const. Política y 157 de la Ley 100 de 1993. “En tanto, que de la otra, son diferentes las personas de la tercera edad que se encuentran en indigencia, esto es, aquellas que carecen de lo necesario para la subsistencia porque, además, de no poderse procurar ingresos por su trabajo esta situación acontece cuando, de un lado, existe reducción, eliminación o inexistencia de capacidad de trabajo remunerativo, lo que se presume de lo avanzado de la edad, y cuando además de ello, también aparece acreditada la inexistencia de trabajo para dichas personas y la ausencia de bienes ni otros medios de ingresos que les permitan sostenerse.”⁷

Las fases de la tercera edad, hacen relación a los períodos necesarios que integran esta etapa de la vida que de acuerdo con los criterios mencionados anteriormente, son para todas las personas de la tercera edad en general (las solventes y las indigentes) las fases de la vejez y la ancianidad. La una (la vejez) que comienza ordinariamente entre los 55 y 60 años, según que sea de mujer u hombre, salvo que se trate de indígenas (a los 50 años de edad) o de envejecimiento precoz (según lo dictaminen los médicos en el caso concreto) y se extiendan hasta

⁶ CARDONA D, ESTRADA A, Agudelo H. Aspectos subjetivos del envejecimiento: redes de apoyo social y autonomía de la población adulta mayor de Medellín, Invest. Educ.Enferm.VOL XXI, N° 2, 2003

⁷ CALVINO MANUEL. El efecto de los factores demográficos sobre la demanda hospitalaria perspectivas Localización. Revista valenciana de economía y hacienda, ISSN 1577-4163, N° 6, 2002 , págs. 77-95

los 65 y 70 años de vida, al que indiquen los medios, según se trate de una u otra persona. A su vez, la ancianidad suele comenzar, según el caso, a los 65 a 70 años o a la edad precoz indicada, y se extiende hasta la muerte (incluyendo, si fuere el caso, la pre-senilidad y la senilidad propiamente dichas) que suele acontecer entre 70 y 80 años.

En cambio, para las personas indígenas de la tercera edad si bien la vejez comienza a los 55 años o 60 años de edad con las excepciones indicadas (de 50 años para indígenas o a la edad precoz comprobada) ella sólo se extiende hasta los 65 años de edad a partir de la cual comienza la ancianidad hasta la muerte (que generalmente mucho más temprano), no sólo porque así lo indica la ley (Artículo 57 y 257 de la Ley 100 de 1993), sino también porque dada su condición su envejecimiento es más acelerado y prematuro que en las demás personas.

En lo que respecta a los mecanismos asociados a la cultura y percepción del adulto mayor prevalece en la sociedad Colombiana, como en otros países en desarrollo de alguna manera, una imagen cultural totalmente negativa del envejecimiento y la vejez. Estos factores de interpretación cultural se pueden dar de diferentes formas e impiden que se direccionen la efectividad en torno a las garantías y los derechos de que gozan los adultos mayores.

Igualmente hay que considerar cómo muchas organizaciones o instituciones tratan de cumplir con el lleno de sus expectativas, con esfuerzos entran en un rol representativo que los convierte en elementos generadores para participar de alguna forma en las actividades dirigidas a adultos mayores, pero lastimosamente para ellos los aspectos valederos es el manejo de los capitales o el ingreso que representa para ellos el poder incursionar en el contexto de los programas que se pueden manejar para el adulto mayor, o sea se va incursionando en un proceso de deshumanización, porque entrarían a conformarse estrategias ambiciosas y asumir el rol de

tipo empresarial, saliéndose entonces muchas veces de la parte social y de las verdaderas necesidades de esta población.

Por último, ha de anotarse cómo en la tercera edad el derecho a la sexualidad asume características particulares de acuerdo con su condición, pero que ha de tener el desarrollo necesario, asistido si fuere el caso, que se estime indispensablemente para la vejez o la ancianidad.

Los derechos a la libertad también es otro factor que se debe tener en cuenta, como lo es de igual manera al señalarse que, no obstante, las limitaciones y disminuciones de la tercera edad, ese derecho a la libertad debe permitir a sus miembros su propio desarrollo de acuerdo con las condiciones pertinentes.

En efecto, las condiciones de la tercera edad acarrea en si misma, en menor o mayor grado, cierto tipo de necesidad de ayuda o apoyo de otras personas y en algunos casos, genera cierta sujeción o dependencia de estos últimos, sin embargo, tal situación no elimina su autonomía e independencia personal, la que por el contrario, suele ejercerse debido a los conocimientos adquiridos y a las experiencias tenidas, con mayor acierto y responsabilidad, por ello, el individuo de la tercera edad también goza de la libertad personal que sus condiciones le permitan, tal razón por la cual tampoco puede ser molestado en su persona o familia, con injerencias, restricciones y limitaciones, ni sometido a sanciones correctivas particulares (Art. 28 Constitución Política de Colombia).

2.2. NORMATIVIDAD VIGENTE TENDIENTES A FORTALECER LOS NIVELES DE PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

2.2.1 Análisis conceptual legal

Primero que todo es interesante apreciar que los derechos humanos son inherentes a la calidad de ser humano. De acuerdo con esta concepción, toda persona ha de tener la posibilidad de gozarlos, sin ninguna distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, edad, u otra condición. Existen una serie de garantías de los derechos humanos que son establecidas por la normativa la cual protege a los individuos a los grupos contra las medidas que vulneran las libertades fundamentales y la dignidad.

En el contexto jurídico propiamente dicho, los derechos fundamentales se enuncian en la normativa internacional en materia de derechos humanos, que viene desarrollándose desde 1945 por el Sistema de las Naciones Unidas y que, en algunas regiones del mundo, ha tenido una evolución particular a través de la creación de instrumentos que reflejan la concepción propia al respecto. Tal es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) y el Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988) para los países de América Latina y el Caribe, los Estados Unidos y Canadá.

En cuanto a la diversidad de posiciones, todos parecen estar de acuerdo en su rechazo parcial, por una parte, a la modernidad antropocéntrica e individualista; y por otra, al edificio

teórico y práctico de las democracias liberales contemporáneas, incapaces de acomodar la diversidad social y proporcionar un trato igualitario a sus ciudadanos (ibíd.).

Diferentes autores como (Van Dyke, 1974; Taylor 1993; Kymlicka, 1996; Young, 1989) con sus respectivas posiciones, de alguna manera, han entrado en el rol de al defensa en la atribución de derechos a ciertos grupos sociales, tales como los indígenas, las mujeres, los ancianos, personas que viven en la pobreza, y otros. Para estos grupos — sostiene Young— “el mero reconocimiento de la igualdad de derechos [...] no ha supuesto ningún cambio en su situación de desventaja social, llegando el momento de reconocerles derechos de grupo”.⁸

En el aporte conceptual, lo anterior supone que es posible hablar de los grupos como titulares de derechos colectivos, que los derechos individuales necesitan de los derechos colectivos, y que no son pensables y realizables sin ellos. Desde esta perspectiva, los derechos de grupo nacen del hecho histórico y social de las diferencias, que inciden decisivamente en la manera particular de concebir los mismos derechos humanos.

En el caso del adulto mayor, interesa resaltar que son titulares de derechos individuales — derechos de primera generación—, pero también son titulares de derechos de grupo —derechos de segunda y tercera generación—, por lo tanto se requiere que junto con el reconocimiento de sus libertades esenciales, puedan disfrutar también del ejercicio de derechos sociales de manera de lograr envejecer con seguridad y dignidad, lo que exige un papel activo del Estado, la sociedad y la familia.

⁸ YOUNG, Van Dike. Marco Internacional de los Derechos Humanos de las personas mayores. 1998. Población y Desarrollo Series CEPAL. Abril de 2004. Santiago de Chile.

En lo que respecta a las garantías que se han tratado de dar en Colombia en torno a la situación del adulto mayor se puede apreciar que se han expedido leyes que han tratado la temática de manera general y una de estas es la Ley Nacional del Plan de Desarrollo 2006-2010 (Ley 1151 de julio de 2007), la cual determina que el Ministerio de la Protección Social, debe llevar a cabo el proceso de definición y desarrollo de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez.

Este proceso se ha venido realizando desde el año 2003, con la participación de múltiples grupos de interés, como: la academia, la sociedad civil organizada a través de asociaciones de personas mayores, instituciones prestadoras de servicios sociales y de salud para las personas mayores, las diferentes instancias del gobierno como los Ministerios, los Institutos Descentralizados, profesionales independientes, investigadores y estudiosos del tema, así como las entidades territoriales del orden municipal, distrital y departamental.

Así, dentro del contexto de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez todos los aportes presentados en las relatorías de las mesas de trabajo que se realizaron de 2003 a 2006, las recomendaciones de las diferentes Asambleas Mundiales sobre Envejecimiento y de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), la revisión exhaustiva de la bibliografía relacionada con las políticas dirigidas a las personas mayores en el mundo y en América, las iniciativas normativas desarrolladas en el país, así como el interés fundamental del Estado Colombiano de atender integralmente las necesidades de las personas mayores y del proceso de envejecimiento ha dado como resultado la implementación de una Política concertada entre los diferentes actores involucrados en la temática de envejecimiento y vejez, después de un proceso de análisis, discusión y acuerdos entre los participantes.

Lo anterior pone de presente el compromiso del Estado Colombiano con una población que por sus condiciones y características merece especial atención. Se han tratado de plantear fundamentalmente, una visión de futuro con el proceso de envejecimiento, y acciones a corto, mediano y largo plazo para la intervención de la situación actual de la población adulta mayor

Por otro lado, y durante la realización de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento ⁹, se reconoce que el mundo está experimentando una transformación demográfica sin precedentes y que en el año 2050 las personas de más de 60 años aumentarán de un 10% a un 21%, con un incremento mayor en los países en desarrollo.

Este cambio demográfico ha traído dificultades y consecuencias para los países pobres y ricos. Dentro de poco, en muchos países industrializados habrá más abuelos que nietos y en los países en desarrollo también se está viendo envejecer a sus poblaciones, lo que causa nuevos problemas, principalmente por las exigencias a los sistemas de asistencia pública, que deberán atender simultáneamente a todos los grupos poblacionales, con diferentes exigencias particulares cada uno.

América Latina y el Caribe tendrán las siguientes características: crecimiento generalizado en todos los países a una velocidad mayor que en los países desarrollados y envejecer puede ser negativo en los actuales contextos económicos, sociales, culturales e institucionales.

⁹ CARDONA ARANGO, Dorisa; Segura Cardona, Ángela Maríab Docente investigadora, Grupo de investigación Observatorio de la Salud Pública, Universidad CES, Medellín, Colombia

Colombia vive un proceso de plena transición demográfica, con una natalidad descendente y una mortalidad moderada o baja por lo que, se espera que la población adulta mayor ascienda al 10,1% en el 2025 y al 18,7% en el 2050¹⁰. Con el envejecimiento se evidencia la velocidad del cambio en la estructura por edades de las poblaciones, producto de modificaciones en el comportamiento de la fecundidad después de los años sesenta, de cambios en los patrones de mortalidad con la polarización epidemiológica, los avances en salud pública y las migraciones internas e internacionales de un gran número de personas.

Conocedora de esta galopante realidad y de cara a las nuevas tendencias de la población colombiana, la Constitución Política, en los siguientes artículos, se estableció lo siguiente:

“§ Artículo 5: El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.

§ Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

§ Artículo 46: El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su

¹⁰CARDONA ARANGO, Doris; SEGURA CARDONA, Ángela María. Políticas de salud pública aplicadas al adulto mayor en Colombia Published in Rev Esp Geriatr Gerontol. 2011;46:96-9. - vol.46 núm 02

integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

§ Artículo 48: La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.

§ Artículo 49: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control.

Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.

§ Artículo 52: Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.”¹¹

De acuerdo con lo prescrito en los artículos en cita, se parecía el diseño de una política, que en cierta medida, fortalezca las debilidades a las que esta población ha estado sometida durante los últimos años, pretendiendo de esta manera, dignificar al adulto mayor y rescatar de ellos lo valioso de sus vida, sus experiencias y lo que a pesar de su ideal, puedan aportar a la sociedad colombiana, la que a su vez debe acogerlos, respetarlos y brindarles la protección y el lugar que se merecen, un asocio con el Estado y la familia, pues entre ellos hay una corresponsabilidad o demanda que aúnan esfuerzos para cumplir ese cometido.

En virtud de lo anterior, en Colombia ha mostrado una activa participación en todo el proceso de negociación del Plan de Acción de Madrid, razón por la cual, este es un compromiso que para el país no admite dudas. Se ratifica también el interés expresado durante la Segunda

¹¹ Constitución Política de Colombia, 1991. Bogotá, Editorial Legis, 2012.

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento al suscribir la Estrategia Regional sobre Envejecimiento, aprobada por la Conferencia Regional Intergubernamental sobre envejecimiento en Santiago de Chile, en noviembre de 2003. En estos escenarios, nuestro país se comprometió a construir en forma colectiva, con la participación de los sectores público y privado, una política de largo plazo en materia de envejecimiento, basada en un diagnóstico que tuviese en cuenta los resultados de investigaciones específicas que permitieran darle, como principal característica, una condición holística ajustada a las necesidades del país.

A partir de este momento, y en consonancia con los compromisos adquiridos, se organizan en Colombia mesas de concertación con los diferentes actores involucrados en la problemática del envejecimiento y de la persona mayor, entre los que se pueden destacar los Ministerios de la Protección Social, Educación Nacional, Comunicaciones, Agricultura, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; el Comité Consultivo Nacional de persona Mayor, organizaciones de personas mayores; universidades con programas relacionados; investigadores, profesionales independientes interesados y comprometidos con el tema y las entidades territoriales. En el período 2003-2006 se plantearon los lineamientos que debería contener la Política, los objetivos, los temas centrales críticos y se realiza un diagnóstico de las personas mayores en Colombia y la situación del país en el contexto latinoamericano.

2.3 CALIDAD DE VIDA EN LA VEJEZ

En cuanto a la calidad de vida en la vejez es un asunto trascendental que afecta no solo a las personas mayores, sino también a sus familias y al conjunto de la sociedad, y si bien en las

últimas décadas el concepto ha sido uno de los más utilizados en las ciencias sociales y en la planificación social en general, en relación al envejecimiento no pierde vigencia, es más, plantea serios retos en términos de desarrollo conceptual y aplicación práctica.

A nivel teórico, el concepto de calidad de vida debe incluir las especificidades propias de la vejez, tanto fisiológica como social, y considerar las diferencias respecto a las anteriores etapas del ciclo de vida. A ello se suma que hay que identificar los elementos de naturaleza objetiva (redes de apoyo, servicios sociales, condiciones económicas, entorno, etc.) y subjetiva (salud, satisfacción, etc.) intervinientes.

A nivel práctico, en la región se identifican tres ámbitos de desafíos en relación a la calidad de vida en la vejez:

- A nivel de mercado, el aumento del número absoluto y relativo de personas mayores provoca modificaciones tanto en el mercado del trabajo como de bienes y servicios.
- A nivel de sociedad, genera nuevas formas de organización de la familia, así como diversas respuestas de la comunidad a los nacientes desafíos de bienestar.
- A nivel de Estado, se debe hacer frente a las nuevas tensiones sociales surgidas de las necesidades de financiamiento de los sistemas de seguridad social, a los cambios en las relaciones de dependencia económica entre generaciones y a la competencia intergeneracional por los puestos de trabajo (CEPAL, 2000).

En la región, las evidencias indican que la situación de las personas mayores es heterogénea, pero en general distan mucho de disfrutar de una calidad de vida acorde a sus necesidades de ingresos, salud, autonomía e integración intergeneracional (CEPAL/CELADE 2003). Las condiciones y estructura de oportunidades que ofrecen los países para vivir los últimos años de la vida no siempre aseguran calidad.

De lo anterior, se deduce que el objetivo central de las intervenciones dirigidas a las personas mayores de la región tienen relación directa con mejorar su calidad de vida y por ende asegurar el ejercicio de derechos sociales. Esto significa, mejorar la condición y posición de las personas mayores. La primera referida al estado material que garantice el acceso y disfrute de recursos y servicios que aseguren una vejez digna (ingresos, créditos, vivienda adecuada, salud, etc.). La segunda concerniente a los aspectos estructurales que determinan la ubicación social de las personas mayores en el conjunto de la sociedad (imagen social, solidaridad intergeneracional, etc.).

Ambas considerando que la vejez es una categoría variable y heterogénea compuesta por personas con intereses y necesidades diferentes.

En la región este ideal se traduce en asegurar elementos objetivos relacionadas con las necesidades cotidianas de las personas mayores tales como seguridad de ingresos, acceso a servicios sociales y sanitarios, fortalecimiento de las redes de apoyo social, entornos físicos

favorables, etc.; y aquellos relacionados con los intereses estratégicos de la vejez como la erradicación de la violencia y discriminación, imagen positiva del envejecimiento, y empoderamiento de las personas mayores, entre otros.

2.4 POLÍTICAS DE VEJEZ

Se entiende por políticas de vejez como aquellas acciones organizadas por parte del Estado frente a las consecuencias sociales, económicas y culturales del envejecimiento poblacional e individual (Huenchuan, 1999), y que dentro de sus atributos generales se encuentra que cuentan con una institucionalidad, medidas programáticas y normatividad.

La institucionalidad se refiere a la entidad responsable de la implementación, seguimiento y rediseño de la política, la cual puede ser un instituto, servicio, consejo u otra base institucional.

- Las medidas programáticas se refieren a la explicitación de intervenciones concretas expresadas en objetivos y resultados, así como la articulación de actividades que llevarán a su consecución.

- La normatividad se refiere al mandato legal de su cumplimiento, expresado en una ley específica y un marco de procedimientos.

En efecto, no existe una institución encargada de la protección que se le debe dar al adulto mayor a nivel gubernamental, debido que pueden existir varias instancias donde los asuntos relacionados con el envejecimiento se entrecruzan o superponen. No obstante, la propuesta es que dichas instituciones logren establecer mecanismos de cooperación o coordinación interinstitucional en que pongan a disposición de un objetivo común sus recursos y poder.

En algunos países, las acciones se sustentan en la Constitución —que puede contener disposiciones particulares en favor de las personas mayores—, algunos disponen de mandatos constitucionales y también de leyes especiales; mientras que otros cuentan solo con leyes especiales, las cuales incluso pueden ser de distinto carácter: general, de referencia o por extensión.

Así mismo la planificación de las intervenciones puede tomar diferentes formas. Una de ellas es que la misma política contenga los lineamientos programáticos para llevarla a cabo, o bien se cuente con un plan nacional específico o con programas sectoriales de “alistamiento”.

Junto con identificar las características principales de una política, interesa también establecer si se trata de una política pública o una política de gobierno. Al respecto se pueden encontrar tres situaciones:

- Política pública, en que existe una política concreta con una base institucional que cuenta con un sustento legal para su implementación —generalmente una ley especial general— que traspasa la temporalidad de los gobiernos y que por lo tanto ha logrado un consenso mucho más amplio en su construcción.

- Política de gobierno, en que existe un documento titulado política o plan, que no necesariamente requiere de un sustento legal y depende de las prioridades del ejecutivo. Por lo tanto su existencia puede fácilmente no perdurar mas allá de la administración de turno.

- Política de gobierno dirigida a consolidar una política pública, en que existe una política concreta que plantea intervenciones específicas e incluye medidas que apuntan a influenciar el aparato del estado (transversalidad), coordinación interinstitucional, desarrollo de institucionalidad, o contemple a realización de una ley especial o reformas legales (Huenchuan, 2003).

Como se deduce, no existe un patrón único de los contenidos de una política. No obstante, el ejercicio es importante a manera de ordenar la discusión y el análisis en relación a éstas; situando las políticas de vejez en el marco más amplio de las políticas públicas.

Elementos para el análisis de las políticas de vejez

La teoría de las políticas públicas aporta algunos conceptos y esquemas útiles para el análisis de las políticas de vejez.

Proceso de construcción de una política

Es aceptado que toda política atraviesa por un ciclo de vida y que las etapas de las políticas públicas están secuencial y cronológicamente ordenadas. El primer momento es la constitución del problema como un asunto público, y posteriormente —una vez aceptado en la agenda de gobierno— se inicia la disputa por su definición.

Esta definición es un producto político, crea un discurso, localiza responsabilidades y moviliza las acciones a determinados elementos “iluminados” por esa definición. Este es el momento más importante en el proceso de una formulación de la política. Aquellos elementos no contenidos en la definición de la cuestión quedarán fuera de ella.

Para el caso de las políticas de vejez, los problemas más graves que enfrentan las personas mayores son, en gran parte, cuestiones socialmente construidas desde la concepción de edad social de la vejez. Es entonces inevitable elegir una definición sobre vejez e identificar los problemas a tratar, puesto que estas elecciones guiarán las políticas públicas (Elder y Cobb, 1993).

Vale mencionar que de la calidad de la definición de la cuestión depende la posibilidad de definir su solución. Una vez definido el problema, se identifican las causas y las alternativas de solución, las cuáles pueden dar origen a ámbitos de intervención específicos.

Se ha señalado en el estudio de las políticas de vejez que es necesario centrarse en el ciclo de vida de la política y considerar para su análisis elementos tales como: definición de la cuestión, actores involucrados y ámbitos de acción de la política, como los que se han pretendido desarrollar en instituciones especiales en este contexto como lo es el en la ciudad de Barranquilla.

CAPÍTULO 3. DIAGNOSTICO PRELIMINAR SOBRE PERSONAS MAYORES, DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES EN COLOMBIA

De acuerdo con diferentes estudios realizados en Colombia, se ha podido evidenciar que el aumento progresivo de la población colombiana, especialmente del grupo de los adultos mayores, representa un desafío para las políticas y los recursos en lo concerniente al desarrollo, la calidad de vida, el cumplimiento de los derechos y la inclusión social. En sólo un siglo el país pasó de 4'355.470, personas a un total de 41.468.384 habitantes, de los cuales el 6.3% (2'612.508), es mayor de 65 años; el 54.6% pertenece al sexo femenino y el 45.4% de las personas mayores son hombres. El 75% de la población general, vive en las cabeceras municipales, a pesar que en áreas rurales hay mayores tasas de fecundidad, lo que se traduciría en un incremento natural de la población allí ubicada, pero el efecto es contrarrestado por las altas tasas de migración (DANE, Censos 1905 y 2005). Del total de la población adulta mayor el 63.12% se concentra en Boyacá, Tolima, Bogotá, Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Santander, Atlántico y Bolívar. Adicionalmente, el 28.8% se encuentra en las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.¹²

Según datos suministrados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en cuanto a los aspectos socio-económicos y los antecedentes familiares de los adultos mayores que ingresan a esta institución, partiendo de que para ellos es una organización con sentido social, el 58% de los que ingresan manejan un estrato medido entre 3 y 4, y el 42% restante, son personas que han sido

¹² Para la elaboración inicial de este apartado hemos utilizado el documento: Ministerio de la Protección Social , Fundación Saldarriaga Concha. Diagnóstico de los Adultos Mayores en Colombia. Bogotá: mimeo, 2007.

abandonadas a su suerte y lo que es peor encontradas en la calle por circunstancias adversas a sus estilos de vida.

Vale la pena destacar y citar que de acuerdo con los indicadores básicos de situación de salud y pensión en Colombia, durante el año de 2006, según datos establecidos por el Ministerio de la Protección Social, la cobertura de salud ascendía al 81.0% de la población total.

De esta cobertura se puede apreciar que el 44.1% corresponde al régimen subsidiado de salud, el 36.9% corresponde al régimen contributivo de salud. De manera específica y con corte a enero de 2007, la afiliación por tipo de régimen de salud muestra que hay 1.903.115 personas mayores de 60 años afiliadas al régimen contributivo y 1.305.170 en el subsidiado, para un total de 3.253.285 personas adultas mayores aseguradas al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Estadísticas más recientes, y aunando otras circunstancias propias de la población del adulto mayor, se puede ver que está considerada como grupo de riesgo de sufrir malnutrición calórico-protéica, problemas de tipo circulatorio, nervioso, respiratorio, entre otros. Se puede observar cómo casi la mitad de los ancianos que vive en residencias geriátricas sufre malnutrición. También se ha visto que el alto consumo de fármacos, los trastornos del afecto, las alteraciones cognitivas, la deficiente dentición y la comorbilidad, son algunas de las causas de la mala alimentación de los adultos mayores, principalmente en aquellos mayores de 80 años, factores que de alguna manera repercuten en su condición social, política y económica.

Dentro de las principales consecuencias de la malnutrición se presentan mayores enfermedades cardiovasculares (secundarias a sobrepeso, principalmente en los adultos mayores entre 60 y 79 años), la anemia (de diferentes orígenes), las úlceras por presión, deterioro cognoscitivo y fracturas y caídas, entre otras.

Para poder de mitigar un poco esta lamentable situación, actualmente existen a nivel local instituciones universitarias que se han preocupado por liderar programas de asistencia sanitaria para tratar la problemática a la que estos adultos mayores se encuentran sometidos en la actualidad; pero por otro lado el Estado ha tratado de magnificar este fenómeno y le ha dado una prelación de que gran parte: de la gente que está en edad de jubilarse, solamente el 30 por ciento tiene pensión. El 70 por ciento de los mayores de 60 años no la tiene, porque no ahorró o no trabajó lo suficiente. Hay 22 millones de trabajadores. Solo 7,7 millones están activamente ahorrando en el sistema pensional, privado o público. Catorce millones de trabajadores no están en el sistema. Solo hay 1,6 millones de pensionados, y de los trabajadores que ahorran solo 2 millones están más o menos cercanos a la pensión. En Colombia es muy difícil pensionarse. El 90 por ciento de la gente que trabaja se queda por el camino y no tiene sistema pensional.

La magnitud de la problemática es mediana debido a que es una población en situación de riesgo por diferentes factores alternos como es el abandono de la familia, la situación de desplazamiento, y muchos de ellos sufren problemas de demencia cenil u otros factores que los ha obligado a quedar en los niveles más bajos como el de indigencia.

Uno de estos factores es lo que tiene que ver con el enfrentamiento del envejecimiento poblacional, expuesto como uno de los cuatro propósitos del Plan Nacional de Salud Pública 2007 - 2010 (Decreto 3039 del 2007), entre otras normas. Dentro de las competencias del profesional de enfermería (Ley 266 de 1996), también se encuentra la de dirigir instituciones y programas de atención primaria en salud, con prioridad en la atención de los grupos más vulnerables de la población y a los riesgos prioritarios, siendo uno de estos, el grupo de personas adultas mayores, debidos a sus condiciones de susceptibilidad.

Además de lo anteriormente dicho, es necesario tener en cuenta las condiciones que son afines a las personas adultas mayores. Para esto es importante reconocer como mínimo la Constitución Política, los derechos del anciano expuestos en la Resolución 7020 de 1992, así como los beneficios de estos consignados en la Ley 1171 de 2007. De igual forma es imperante analizar y hacer cumplir la demás legislación concerniente al adulto mayor bien sea como empresarios (Gerentes de Centros de Vida o Bienestar del adulto mayor), como empleados o simples observadores de las condiciones en que estén nuestros ancianos.

Por último y no menos importante, todo este análisis de la situación nacional del adulto mayor y su legislación es deber estar concientizado sobre la importancia de generar un cambio de pensamiento y accionar hacia la persona adulta mayor desde sus propios hogares y comunidades, como en nuestro ambiente laboral, social y cultural.

Finalmente, y de acuerdo al análisis anterior, es claro que las personas de 65 años y más son vulnerables según la ley colombiana, situación que los coloca en desigualdad frente a otros grupos poblacionales, a pesar de que existen normas nacionales e internacionales de protección, igualdad y oportunidades que las favorecen y protegen son dejadas en el papel debido a que no se llevan a la práctica y es el individuo quien carga con las consecuencias al no poder acceder a las oportunidades y utilizar los recursos sociales a que tiene derecho.

El adulto mayor se encuentra desprotegido e indefenso ante obstáculos y situaciones difíciles, por condiciones sociales, económicas y ambientales que lo acosan diariamente, por ende, es vulnerable pero no debido a su condición, sino a la falta de oportunidades y limitaciones que le brinda su entorno. Pero cada vez es más frecuente el despliegue de leyes que especifican los derechos humanos de los grupos de personas vulnerables, marginales, desfavorecidos o socialmente excluidos.

Este nuevo enfoque de desarrollo basado en derechos propicia la titularidad de los adultos mayores, pues alienta a conciliar las necesidades y los intereses, independientemente de su edad, con sus propios derechos y responsabilidades; visualiza una persona que reclama un tratamiento particular en razón de su edad e introduce nuevas reivindicaciones para especificar y profundizar en sus derechos y libertades fundamentales.¹³

¹³ Naciones Unidas, Huenchuan S. Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas. Santiago de Chile: NU; 2009.

Con la inclusión de la línea sobre seguridad social en salud y pensión, se ha buscado garantizar el acceso universal de la población adulta mayor a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y el acceso a la prestación integral de los servicios de salud, diseñar e ~ implantar un modelo de atención basado en atención primaria en salud y el desarrollo de instrumentos, guías, normas técnicas para la intervención de las enfermedades mas prevalentes en la persona mayor.

Es decir, la política de salud pública y pensión para atención del adulto mayor en Colombia, que debería ser garantizado por el Estado como parte de sus derechos, según las disposiciones nacionales e internacionales, se redujo a su afiliación y acceso, que está normado por el Sistema General de Seguridad Socia.¹⁴

Por otro lado existe el programa Colombia Mayor para los mayores de 65 años que están en extrema pobreza o en indigencia. Comenzamos con 615.000 personas y ya vamos en 1,1 millones. Tenemos que llegar a 2,4 millones en el 2018; o sea, todos los colombianos de Sisbén 1 y 2 mayores de 65 años. Además, estamos implementando el sistema BEP (Beneficios Económicos Periódicos), que es un mecanismo de ahorro con subsidio, administrado por Colpensiones, para los trabajadores informales que ganan menos de un salario mínimo.

Este programa consiste en que un trabajador informal no puede estar en el régimen pensional. Lo que hace este esquema es crear unas cuentas individuales de ahorro, y apenas llega la edad de retiro ese ahorro, más el beneficio financiero, recibe un 20 por ciento de subsidio. De esta forma

¹⁴ Kinsella K, Phillips D. Global aging: the challenge of success. Population Bulletin. 2005;60:1–42.

garantizamos la protección para la vejez de estos colombianos, que son cerca de 9 millones que no pueden cotizar para pensión.

Por otro lado, en la Corte Constitucional se denunció un sistema absolutamente inequitativo en pensiones, en donde si hay tres tipos de desigualdad. Primera: entre el que se pensiona y el que no, a pesar de que tienen la misma edad. Segunda: todas las pensiones de régimen de prima media tienen subsidio, pero mientras más alta la pensión, más alto el subsidio; y tercera: dos personas que trabajan, exactamente con la misma vida laboral, si uno está en el fondo de pensiones y otro en el régimen de prima media, tienen pensiones distintas.

Y en cuanto a los regímenes especiales de magistrados y parlamentarios éstos no son inequitativos?, Sí. El año entrante se acaba ese régimen de transición, pero las altas pensiones seguirán siendo subsidiadas en el régimen de prima media, y eso hace más inequitativas las pensiones. Eso es lo que tenemos que acabar.

Y la fragmentación de las pensiones son subsidiadas? Una pensión de salario mínimo es subsidiada, pero también la de 25. Cada vez que una persona con salario mínimo se pensiona, el Estado debe contabilizar que eso le vale 87 millones. Ese debe ser el tope del subsidio.

La pensión está subsidiada. Desde la pensión de un mínimo hasta la de 25 salarios mínimos. El Estado devuelve mucho más de lo que ahorró.

El tope del subsidio, el sistema actual es absolutamente inequitativo porque las pensiones seguirán siendo muy altas, por el subsidio, para los ricos. Y muy bajas para los pobres.

La propuesta en la reforma es que eso no siga, que todos los colombianos reciban el mismo subsidio a su pensión, o sea todos los trabajadores deben recibir el mismo subsidio, sobre la base de un salario mínimo. Quienes puedan cotizar más lo harán a partir de ahí en el Régimen de Ahorro Individual, que administran los fondos privados de pensión. Es decir, el subsidio sigue únicamente para salario mínimo. Se elimina para salarios altos.

En los de salario mínimo el 70 por ciento de las pensiones son de salario mínimo.

Y la pensión de quien gane más de un mínimo, recibirá la pensión y el subsidio equivalente a un salario mínimo. Mejor dicho: todas las pensiones tendrán un subsidio universal. Se le pagará como si su ingreso fuera de un salario mínimo. Si alguien gana, por ejemplo, 10 millones de pesos, se le pagará el subsidio sobre los primeros 589.000 pesos, que es el mínimo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Al finalizar la presente investigación se pudo vislumbrar la magnitud de la problemática social que representa la población adulta mayor, la cual con el correr de los años ha ido en aumento debido a que en la población colombiana se ha incrementado la longevidad, lo que ha repercutido en el porcentaje de adultos que forman parte de las estadísticas nacionales y locales.

En realidad de verdad, lo preocupante de la situación no es el número de adultos mayores existentes, lo que realmente preocupa es la situación de los mismos, en la medida que el país no cuenta con una infraestructura legal y económica que permita asumir con responsabilidad el reto de brindarles la protección y los medios necesarios para suplir sus necesidades básicas en aquellos casos en que no cuenten con unos recursos propios o con una familia que se los proporcione.

Dado los avances legales y jurisprudenciales que se han suscitado en torno al tema y al respaldo que la Constitución Política de Colombia de 1991 le proporcionó a este sector de la población es que de alguna manera se han adelantado campañas y políticas de orden institucional, las cuales de por sí no han sido suficientes, ya que basta con mirar las calles de cualquiera de las principales ciudades del país para poder apreciar que la problemática del adulto mayor desprotegido y en estado de abandono aún persiste, quizás en menos proporción que en lustros anteriores.

En razón de lo anterior y como respuesta a esta lamentable situación es que existen en Barranquilla instituciones tan importantes sin ningún interés particular se encarga de albergar aquellos ancianos, que por diversas circunstancias de la vida, no cuentan con un hogar que los acoja, carecen de recursos propios o de una pensión de vejez que les permita solventar sus necesidades básicas, lo que los coloca, sin lugar a dudas, en una condición de vulnerabilidad, correspondiéndole a este ente asumir el papel de protector.

Si bien es cierto el Estado ha abanderado políticas de vejez tales como el Sistema de Seguridad Social Integral y el Sistema de la Protección Social, los cuales están orientados a mejorar la calidad de vida de los colombianos, también lo es que al parecer estas no han sido suficientes o bien ejecutadas por cuanto el problema del adulto mayor en estado de necesidad persiste en un alto porcentaje, lo que sugiere que las políticas deben ser más agresivas y contar con los recursos económicos suficientes que permitan erradicar, o en su defecto mitigar sustancialmente, esta lamentable situación.

En razón de lo anterior, es responsabilidad de las nuevas generaciones propender por la igualdad de derechos para hombres y mujeres, derecho al trabajo evitando la discriminación por edad; derecho a la seguridad social constituyendo el seguro de vejez obligatorio; derecho de protección a la familia con adultos mayores; derecho a un nivel de vida adecuado que le permita a los adultos mayores satisfacer necesidades básicas y contar con viviendas adaptadas a sus condiciones; derecho a la salud física y mental con intervenciones sanitarias dirigidas a mantener la salud en la vejez; derecho a la educación y la cultura con el disfrute de programas educativos y

con la posibilidad de poner sus conocimientos y experiencias a disposición de las generaciones más jóvenes.

Además de lo anterior, no podemos perder de vista la corresponsabilidad que existe entre el Estado, la sociedad y la familia lo cual demanda un compromiso y responsabilidad compartida, donde cada parte debe aportar lo propio para que se cumpla la protección integral a la que tiene derecho el adulto mayor de conformidad con el mandato constitucional y así se le dé el valor y lugar privilegiado que deben tener los ancianos dentro de la estructura familiar y social.

RECOMENDACIONES

La Secretaria Municipal de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, debe desarrollar desde la Coordinación del Programa Tercera Edad una serie de actividades encaminadas a promover la participación activa y dinámica de los ciudadanos adultos mayores residentes en el municipio con el fin de posibilitar la adquisición y fortalecimiento de hábitos de vida saludable y el rescate de sus valores como actores sociales importantes.

Por otro lado, es necesario garantizar la provisión de servicios y programas integrales de atención, promoción y prevención en salud física y mental para los adultos mayores en instituciones públicas y privadas, para lo cual se requiere la implementación de acciones permanentes de educación y capacitación en la prevención y el autocuidado; acciones estas que

deben estar sujetas a unos controles permanentes y sistemáticos por parte de las autoridades, a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas.

Es importante también crear programas especiales en detección oportuna y tratamiento temprano de enfermedades crónicas entre los adultos mayores, así como de cuidado y auxilio a quienes tienen discapacidades funcionales.

Las anteriores recomendaciones giran en torno a la necesidad que se tiene de diseñar unas políticas preventivas para brindar al adulto mayor que no cuenta con recursos propios, ni con acompañamiento familiar, unas condiciones generales de bienestar y asistencia que le permitan tener, en medio de estas difíciles circunstancias, una buena calidad de vida y una vejez digna.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALARCÓN, Luis Fernando. Algunas reflexiones sobre las posibles reformas al sistema pensional. Abril 2006 <http://www.consejoreformaprevisional.cl/documentos/audiencias/25-04-2006-FIAP.pdf>

Antecedentes Históricos INP http://www.inp.cl/portal/inp/datos_historia.htm

ARENAS MONSALVE, Gerardo. El derecho colombiano de la seguridad social. Bogotá: Legis, 2007 Segunda Edición.

ARENAS MONSALVE, Gerardo. El drama pensional: Porqué nuevas reformas. En: Revista Javeriana. Junio 2005 No 175 Tomo 141 p. 39-73

• BERSTEIN, Solange, LARRAÍN, Guillermo y PINO, Francisco. Serie de documentos de trabajo Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones: Cobertura, densidad y pensiones en Chile: Proyecciones a 20 años de Santiago, Chile. Noviembre 2005

ANZOLA PÉREZ, E.; Galinsky, D.; Morales, M.F.; Salas, A. y Sánchez, M. (1994). La atención de los ancianos: Un desafío para los años noventa. Publicación científica 546. Organización Panamericana de la Salud.

BAZO, María Teresa. Vejez dependiente, políticas y calidad de vida de España 1998 Universidad del País Vasco / EHU. Departamento de Sociología Avda. Lehendakari Aguirre, 83. 48015 pág. 2

Berstein, Solange; Larrain, Guillermo y Pino, Francisco (2005). Cobertura, densidad y pensiones en Chile, proyecciones a 20 años plazo. Santiago de Chile: Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.

BIEN-ESTAR Y MACROECONOMÍA 2002-2006: El Crecimiento Inequitativo No Es Sostenible. Publicaciones Especiales - CD para Economía y Finanzas Públicas. Junio 2006 http://www.contraloriagen.gov.co:8081/internet/central_doc/Archivos/264/Bienestar%20y%20macroeconomia%202002-2006.pd

BUSSE 1987 –j.c. Horn y Meer. Citado por Papalia ene. Libro, serie Psicología del Desarrollo Humano, Adultez temprana, intermedia y Tardía. Octava edición. Vol 3. McGraw Hill Interamericana S.A 2001.

CARDONA D, ESTRADA A, Agudelo H. Aspectos subjetivos del envejecimiento: redes de apoyo social y autonomía de la población adulta mayor de Medellín, Invest. Educ.Enferm.VOL XXI, N° 2, 2003.

CARME TRIADO, Feliciano villar, modelos de envejecimiento y percepción de cambios en una muestra de personas mayores de Barcelona 2007 n°73, 43-55 pág. 2

Congreso de La República de Colombia, Seguridad Social., Ley 100 de 1993. Artículos 33, 133 y 257.

DANE, 2005. En:
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_search&Itemid=99999999&searchword=adulto+mayor&searchphrase=any&ordering=newest&limit=20

Dirección General de Promoción Social del Ministerio de Protección Social. Censo, 2008.En:
<http://www.minproteccionsocial.gov.co/Lineamientos/Lineamientos%20T%C3%A9cnicos%20Centros%20Persona%20Mayor.pdf>

Giraldo, César (2006). Balance de una reforma. La protección social en Colombia. Colección de estudios sobre protección social. Crecimiento Equidad y ciudadanía. CID. Bogotá: Universidad Nacional.

IDALMIS CARMENATY Díaz, laudelina soler Orozco evaluación funcional del anciano Rev. Cubana Enfermera 2002; 18(3):184-8 pág. 1

HELMSDORFF, Loredana. Sistema Pensional Colombiano y Atención al Adulto Mayor. Ministerio Nacional de Planeación. 2007 Anexo 1
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDS/Pobreza/En_Que_Vamos/AMPLIACION%20PENSIONAL%20cartilla.pdf

LAGUNA BELIO R. (14 Diciembre 2007) La vejez tiende a aumentar con un rostro femenino predominante. Luxcrónicapotosina. [Citado 26 de mayo 2009]. Disponible en:
<http://www.cimacnoticias.com/site/07121305-La-vejez-tiende-aa.31427.0.html>

TOOD JEWELL, Máximo Rossi, Patricia Triunfo. El estado de salud del adulto mayor en América Latina. Cuadernos de economía, V XXVI n° 46 Bogotá, 2007 pag. 4